

Análisis ético-político de las elecciones

Departamento de Filosofía de la UCA

Resumen

La reflexión desde lo que conviene a la sociedad pasa, ineludiblemente, por reconocer el carácter conflictivo, contradictorio e incluso antagónico de la sociedad salvadoreña. No existe un “interés general” ni un “bien común”, sino como hipotético resultado histórico, el cual antes deberá recorrer la confrontación de posiciones e intereses. En tal sentido, este artículo refiere que el primer parámetro para el análisis de las elecciones —incluyendo la campaña electoral, los resultados electorales y el escenario político derivado de ellos— ha de ser constatar qué tanto han contribuido o qué tanto obstaculizan el cambio social a favor de los intereses de las mayorías populares. Éstas son “el lugar” social desde el cual se debe hacer la reflexión, de acuerdo con el enfoque filosófico de Ignacio Ellacuría, quien también enseñaba la importancia de tomar en cuenta “el momento” en que se realiza e inserta la reflexión. Porque aquí, el punto de vista es el proceso y sus tendencias a lo que apuntan. Y si los hechos o las coyunturas determinadas favorecen su avance o lo entorpecen, si lo dinamizan o lo frenan, si lo reafirman o tienden a desviarlo de su curso.

1. Marco general del análisis

Al analizar las elecciones, algunos dicen adoptar la perspectiva de “lo que conviene al país”. Puede parecer muy bienintencionado. Sin embargo, la formulación adolece de abstracción y tras la aparente objetividad pueden esconderse buenas dosis de subjetivismo. El análisis puede resentirse de una falsa

neutralidad y de una imparcialidad sospechosa, que encubran los prejuicios y el deslizamiento a posiciones preconcebidas y, en parte, equívocas. La postura debe ser doble, desde la sociedad y desde la historia.

La reflexión desde lo que conviene a la sociedad pasa, ineludiblemente, por reconocer el carác-

ter conflictivo, contradictorio e incluso antagónico de la sociedad salvadoreña. No existe un "interés general", ni un "bien común", sino como hipotético resultado histórico, el cual antes deberá recorrer la confrontación de posiciones e intereses. Es por eso que la UCA ha planteado que el centro de su actividad son las mayorías populares, que su orientación y punto de vista han de ser el de las mayorías oprimidas y marginadas, que su inspiración cristiana la lleva a adoptar la parcialidad y el compromiso, expresados teológicamente, en la opción preferencial por los pobres. De ahí la definición de nuestra institución por el cambio social, entendido éste como cambio de estructuras, que se revelan esencialmente injustas e inhumanas. Por tanto, el primer parámetro para el análisis de las elecciones —incluyendo la campaña electoral, los resultados electorales y el escenario político derivado de ellos— ha de ser constatar qué tanto han contribuido o qué tanto obstaculizan el cambio social a favor de los intereses de las mayorías populares. Éstas son "el lugar" social desde el cual hacer la reflexión, según el enfoque filosófico de Ignacio Ellacuría.

Además del lugar desde el que se piensa la realidad, Ellacuría enseñaba la importancia de tomar en cuenta "el momento", en que se realiza e inserta la reflexión. Es la mirada que surge desde la historia. Aquí, el punto de vista es el proceso y sus tendencias, a lo que apuntan. Y si los hechos o coyunturas determinadas favorecen su avance o lo entorpecen, si lo dinamizan o lo frenan, si lo reafirman o tienden a desviarlo de su curso. Desde esta óptica cabe decir que las elecciones salvadoreñas de 2004 constituyen un "momento" —en el sentido dialéctico de la palabra— del proceso de transición democrática, por el cual atraviesa el país. La transición se ha venido abriendo paso de manera ascendente, desde el colapso del régimen con el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, el cual puso fin a casi cinco décadas de dictadura militar. La dinámica de la guerra civil permitió la consolidación de una incipiente democratización, la cual alcanzó un momento de salto cualitativo con el Acuerdo de Paz de 1992.

Transición democrática implica cambio en las formas de ejercicio de la política, pero también en sus contenidos. Tres elecciones presidenciales y cuatro elecciones municipales y legislativas reflejan las transformaciones en lo primero; la permanencia en el poder de una oligarquía, predominantemente comercial y financiera, refleja la falta de transformación en lo segundo. Si la democracia ha

de ser poder del pueblo y no tan sólo una forma de elegir autoridades, que administren la cosa pública, El Salvador sigue lejos de culminar el proceso de transición democrática. Una transición que requiere de la alternancia en un sentido formal, ya que cuando termine su cuarto período presidencial, ARENA llevará en el Órgano Ejecutivo más años que los que estuvo el PCN, durante la dictadura. Es el peligro de "mexicanización" de la democracia salvadoreña, con la tendencia a conformar un "partido oficial", al modo como lo fue el PRI, en México. También en el sentido real, dado que la permanencia de ARENA en el gobierno se traduce en la implantación de un modelo que favorece exclusivamente al sector hegemónico de la clase dominante, convertido en nueva oligarquía. Transición democrática inacabada, imperfecta, que puede malograrse o quedar truncada, es el otro eje para interpretar las elecciones.

¿Qué tanto han contribuido las elecciones de 2004 a consolidar y a hacer avanzar la transición democrática o qué tanto la han frenado y debilitado? Es pregunta de difícil respuesta, que requiere de múltiples valoraciones y matizaciones. Interrogante que exige también tomar en cuenta ciertas concepciones estratégicas, que suponen un horizonte histórico hacia el cual avanzar. Si la esencia del poder oligárquico —terrateniente y agroexportador, en el pasado, centrado en el sector servicios, modernizante y financiero, en el presente— se ha mantenido, pese al cambio de régimen político, entonces, se constituye hoy en el gran obstáculo para la democratización real de la nación.

La concepción de una necesaria revolución democrática cobra sentido, en cuanto al contenido de las transformaciones pendientes, por más que la época esté signada, desde el fin del conflicto militar, por la reforma como método privilegiado de acción histórica. No es sostenible, ni en teoría ni en la práctica, la existencia simultánea de oligarquía y democracia. Sistema oligárquico con régimen democrático no pasa de ser el sueño perfecto de la clase dominante, para ver recubierta de legitimidad, desde las formas democráticas del Estado, la dominación ilegítima que ejerce sobre la sociedad. Es la misma contradicción del sistema mundial, en su conjunto, que se presenta, agudizada e insostenible, en una región de la periferia, subdesarrollada y pobre, como El Salvador.

Por eso mismo, Ellacuría sostenía que "la pregunta no es si se necesita o no una revolución, sino qué revolución se necesita y cómo puede lle-

vase a cabo". Y contestaba que la revolución que se necesita es doble: una revolución anticapitalista y una revolución antiimperialista. En este momento no existe en el país un proceso donde el antiimperialismo o la posición antisistémica sean el eje de la acción política, aunque ambas debieran inspirar actitudes y definir posturas. Así como se hacen presentes, inversamente, en decisiones y compromisos que asume el poder oligárquico, el cual, además de los poderes fácticos, detenta el control de gran parte del aparato estatal. La suscripción apresurada del tratado de libre comercio con Estados Unidos, pese a la evidente asimetría de su negociación y el irresponsable compromiso asumido en la ocupación de Irak, son buenas muestras de ello. La actitud de sumisión o de resistencia a la superpotencia imperial es el mejor parámetro histórico para determinar la posición real de cada fuerza política en el mundo. La resistencia al imperialismo no necesariamente ha de ser antisistémica. Así lo han demostrado Francia, Alemania y, en días recientes, el nuevo gobierno español. Así lo están demostrando, asimismo, los gobiernos de Venezuela, Argentina y Brasil en nuestro continente.

En el caso salvadoreño, las dos dimensiones, antiimperialista y anticapitalista, de la revolución histórica pendiente, están intrínsecamente relacionadas con la inmediata revolución democrática, que pasa por el avance y la consolidación de la transición democrática, la cual comporta elementos de lucha antioligárquica como parte de la democratización real del sistema y no solo del régimen. Es lo que está en el fondo y debiera inspirar los planteamientos de lucha contra el neoliberalismo, el cual se concreta en un modelo económico impulsado desde el poder y en un estilo de conducción autoritario de la cosa pública. La resistencia frente a ese modo de dominación y a los contenidos de la política estatal implica un arduo trabajo de esclarecimiento y educación política del pueblo salvadoreño, para imprimir rumbo y sentido a las luchas cotidianas de los sectores dominados y dotar de sangre y músculo al esqueleto de los programas electorales de gobierno. La inmediatez de ciertas demandas no debiera oscurecer su necesaria relación con las tareas estratégicas, que la revolución democrática demanda.

La competencia electoral constituye una coyuntura idónea para que la lucha de ideas y la confrontación de proyectos, para que, sobre todo, la educación política del pueblo, pasen a primer pla-

no. Lamentablemente, predominó la concepción mercantilista de la política, la cual considera a los candidatos como una mercancía que debe venderse y al pueblo, una vez reducido a su condición de electorado, como un mercado, donde colocar el producto. Gran parte de la propaganda política se manejó, entonces, según las técnicas de la publicidad comercial. El poder sistémico goza, en eso, de todas las ventajas: tiene más recursos para una campaña mediática y cuenta con la experiencia.

La imagen de los candidatos centró la campaña, dejando en un segundo plano el contenido de los programas. Otra parte considerable de la propaganda fue enfocada al ataque alevoso contra el rival, sin respetar límite ético alguno, según la regla fascista de que una mentira machaconamente repetida va a terminar convirtiéndose en una verdad para el gran público. La oposición se dejó poner a la defensiva y terminó imitando los métodos de la derecha oficialista. La campaña fue, desde una perspectiva informática, pobre y, desde una perspectiva pedagógica, nula. Primaron el populismo y la demagogia del lado opositor, simple acumulación de demandas y aspiraciones populares, mientras el partido oficial privilegiaba una campaña ideológica. La lucha electoral evidenció su carácter clasista. Sacó mayor provecho la derecha de ARENA, la cual supo enfocar como lucha de clases la lucha electoral. A la par de la campaña del partido se desarrollaban dos campañas paralelas, una desde el poder ejecutivo y otra desde la sociedad civil: la propia clase dominante se movilizó.

La clase dominante desempeña a la vez el papel de clase dirigente. ARENA es, al mismo tiempo, partido, movimiento social y maquinaria ideológica al servicio de la clase en el poder. La naturaleza de dicho poder, y en la misma medida el modelo que impulsa —neoliberal, para definirlo sin mayor detalle—, condiciona lógicamente la polarización del sistema de partidos. Obliga a éstos a definirse a favor o en contra; fuerza a cada partido a ofrecerse como posible administrador del mismo o a presentarse como su alternativa real. El centro político estaba por ello mismo condenado, o se desenmascaraba como parte de la derecha que se oferta, ante la presunta necesidad de un recambio, o se presentaba como parte de la oposición formal, que puede restarle votos a la oposición real y, con ello, volver innecesario el recambio. En ambas variantes, el centro y su discurso caían en el vacío, pues la contradicción principal producía tensión, dadas las

dos únicas posibilidades reales: que ARENA siguiera en el poder o que el FMLN llegase al mismo. Estos escenarios caracterizaron el momento político y fueron determinantes para la alta concurrencia a las urnas y para sepultar con el voto a las dos opciones supuestamente centristas.

El centro político salvadoreño ha vivido hasta ahora de la ambigüedad y las oscilaciones. Pero el momento histórico demanda claridad y firmeza. Los resultados confirmaron esa necesidad. Un nuevo escenario donde las agrupaciones de centro desaparecen, aumenta la polarización, pero al mismo tiempo gana en claridad. El centro puede resurgir solo si acomete una renovación de ideas y estructuras. La izquierda no tiene tal urgencia, aunque le conviene un examen crítico.

La izquierda, representada por el FMLN, ha vuelto a demostrar, en elecciones presidenciales, que no sabe ganar. Fácilmente se enreda en las trampas que le tiende su adversario principal. Se ha mostrado incapaz de imponer su propia agenda en el debate político e incluso incapaz de imponer el debate. De forma que la derecha de ARENA, con habilidad, pudo eludir el debate directo e imponer su agenda de temas, desde su aplastante superioridad, en la sobresaturación mediática. Colocada a la defensiva, la izquierda del FMLN reaccionó tarde y mal a la campaña sucia, con su propia campaña sucia, cayendo también en esto en la trampa de su enemigo. Desconectada su campaña del programa de revolución democrática, que debería inspirar toda su conducta durante la transición, no supo retomar la iniciativa y terminó con una campaña floja en contenidos, en propuestas y en visión estratégica. Dureza verbal, pero debilidad de ideas; radicalismo en las formas, simple posibilismo en los contenidos. A pesar de ello, sin el dramático vuelco masivo a las urnas, la izquierda hubiera podido estar cerca del triunfo o, por lo menos, de obtener un resultado reñido, visto el importante crecimiento en la cantidad de votos.

El proceso electoral ha demostrado, asimismo, que esta derecha no está dispuesta a perder, no está preparada para perder. Sus percepciones antes de las elecciones, pese a las predicciones tranquilizadoras de la mayoría de las encuestas, eran de alarma. Su reacción fue echar mano a todas las palancas posibles, incluidas las ilegítimas e ilegales. El uso de propaganda "privada" para la campaña sucia, de un mercenario —un delincuente, porque violó varias de las normas del Código Electoral, ante la

pasividad de un Tribunal Supremo Electoral paralizado, por su sistema de voto cualificado— fue el hecho más connotado. El papel de ciertos medios de comunicación social, cuyos propietarios promovieron una parcialidad escandalosa y denotaron falta de profesionalismo y de ética periodística, fue, asimismo, revelador. También las amenazas a trabajadores y empleados, por parte de varios empresarios, asustándolos con la pérdida del empleo. De igual forma, el tema de las remesas y la permanencia de los emigrantes en Estados Unidos, en supuesto peligro, si ganaba el FMLN, campaña a la que se sumaron algunos funcionarios prominentes de dicho país.

No obstante, el detalle más revelador del temor de la derecha oligárquica y de su poca disposición a respetar los resultados, fue el movimiento de fuga de capitales, en las cuatro semanas anteriores a las elecciones. Salieron del sistema bancario nacional, en ese breve lapso, 196.4 millones de dólares. ¿Cuánto más hubieran sacado del país antes del 1 de junio, si el FMLN hubiese ganado las elecciones? La disposición de la derecha económica a descapitalizar la nación, en caso de una victoria opositora, muestra su escaso patriotismo, su desprecio a la democracia y su voluntad desestabilizadora. La introducción del tema de Venezuela y de su crisis interna en la campaña, por la derecha, refleja así su verdadera naturaleza: era una amenaza. El mensaje era: estamos dispuestos a seguir las mismas tácticas que usa la clase dominante venezolana y a impedir la gobernabilidad, si gana el FMLN. Es algo con lo cual la izquierda deberá contar: la oposición militante de la clase y no solo de la derecha, derrotada electoralmente, en caso de que un día lograra arribar al Ejecutivo. Lo atípico de las elecciones de 2004, su dimensión clasista, ha dejado esta lección histórica.

✦ El FMLN, al menos su actual dirigencia, ha mostrado que tampoco sabe perder. El discurso, en la noche de la jornada electoral, es inadmisibile. Si al pueblo le falta cultura democrática, hay que decir que a su "vanguardia" le falta todavía más. ¿Cómo va a exigir la izquierda respeto a la voluntad popular, si irrespeta con sus actitudes esa misma voluntad cuando no le es favorable? La tradición democrática de felicitar al ganador es una forma de reconocer el resultado, de ofrecer lealtad, en la conducta opositora, y de respetar a la población que votó por el adversario. Rehusar la habitual felicitación es un gesto inapropiado, que no ayuda ni

a la cultura democrática ni a quien asume dicha actitud. La postura posterior de achacar exclusivamente a "factores externos", es decir, a la campaña de ARENA la derrota, significa rehuir la responsabilidad por el fracaso y eludir el necesario análisis y la autocrítica de los errores cometidos. Tampoco revela madurez democrática pretender que no hubo derrota, al valorar de forma exclusiva y unilateral el aumento de la propia votación. Se gana con la mitad más uno de los votos válidos emitidos, por lo tanto, lo decisivo es el porcentaje obtenido. Otra lectura de los resultados es caer en un triunfalismo absurdo y no pasa de ser el ya conocido dicho de pretender tapar el sol con un dedo. La izquierda, hoy más que nunca, necesita un baño de realismo y dejar de vivir atrapada en sus propias fantasías. Tampoco se trata de echar por la borda todo lo alcanzado o de no valorar los avances logrados, a pesar del fracaso. Mucho menos de caer en el pragmatismo y confundirlo con el necesario realismo político.

ARENA y el presidente electo deberán demostrar que saben ganar. El triunfo puede volverse una victoria pírrica, si no valoran de manera conveniente el marco de crisis nacional latente, en cual se da, y las turbias perspectivas de un modelo que viene agotándose en la misma medida en que se han ido cerrando las posibilidades para asumir mayores niveles de endeudamiento para el país. Viene la hora de pagar la factura por todo lo que los gobiernos anteriores de ARENA despilfarraron o hicieron a puro endeudamiento externo. Es tiempo también para corregir los graves costos sociales, los desequilibrios económicos y la marginación de ciertos sectores. Sobre todo, debe corregirse el estilo autoritario de conducción y el exagerado presidencialismo, defectos que se han dado de manera más acusada en el último gobierno de ARENA. Urge que el partido de gobierno asuma el método del diálogo y de la concertación. El costo de ceder algunas veces, siempre será menor que el de pretender no ceder nunca y cerrarse ante cualquier crítica o iniciativa opositora. Si Elías Antonio Saca cumple con su programa y con sus promesas de campaña, podría ganar lo que ahora no está claro ha obtenido: el voto de la credibilidad, en lugar del voto por el miedo. Lo más decisivo es un cambio en las prioridades de su gobierno, que demuestre que la primera de todas es la sensibilidad social. Si el sistema no logra hacerse de "un rostro humano" que resulte convincente, lo que puede venir es una agudización de la crisis, en todos los niveles, de insospechadas consecuencias. Es el ver-

dadero peligro de la ingobernabilidad que acecha, aquella con raíces en la sociedad, más que una incubada en la vida legislativa.

2. Los resultados

La primera sorpresa fue el alto nivel de participación electoral, sin precedentes en la transición democrática. Votaron, aproximadamente, dos de cada tres salvadoreños inscritos en el padrón. La cantidad oficial asciende a 2 227 473 votos, que representan el 67.34 por ciento de participación ciudadana. El dato, por sí solo, no significa un fortalecimiento de la democracia en su credibilidad o en la conciencia política de la población. No puede hacerse la valoración de las cifras sin valorar también el conjunto de factores que incidieron en este evento electoral, que lo volvieron atípico y de carácter extraordinario. Ha roto tendencias anteriores de elevado absentismo, pero tampoco representa una nueva tendencia hacia mayores niveles de participación. Está por verse si los índices se mantienen en las próximas elecciones.

Hay quien afirma que la elevada participación cobró sus propias víctimas: el centro. Es una verdad a medias. El PCN obtuvo 61 781 votos, que representan el 2.71 por ciento, es decir, no alcanzó el techo mínimo del 3 por ciento, que le permitiría seguir existiendo legalmente. Asimismo, la Coalición, que necesitaba el 6 por ciento, quedó lejos de ese mínimo con el 3.9 por ciento, correspondiente a 88 737 votos. En ambos casos, el desempeño fue negativo no solo en porcentajes. El PCN perdió 119 387 votos, respecto a las elecciones de 2003, mientras que los partidos de la Coalición, PDC y CDU, perdieron, en conjunto, 76 648 votos. La debacle del llamado centro político alimentó, sin duda, el caudal de ARENA, con una cantidad de votos nada despreciable, pues dicha sangría suma 196 035 votos, que, en gran parte, puede presumirse se movieron al partido oficial. Las tesis centristas de superar la polarización y asegurar la gobernabilidad, aunque formalmente razonables, no resistieron la verdad de las contradicciones de clase, que imperaban en este momento del proceso. Pregonado a los cuatro vientos por la derecha como una situación de vida o muerte, de "salvar nuestro sistema de vida", la tibieza del centro solo alimentó la desconfianza del electorado o su percepción de que su voto por él no sería útil.

➤ No es posible saber cuánto del voto del FMLN fue, en realidad, un voto de rechazo a ARENA, al

dos únicas posibilidades reales: que ARENA siguiera en el poder o que el FMLN llegase al mismo. Estos escenarios caracterizaron el momento político y fueron determinantes para la alta concurrencia a las urnas y para sepultar con el voto a las dos opciones supuestamente centristas.

El centro político salvadoreño ha vivido hasta ahora de la ambigüedad y las oscilaciones. Pero el momento histórico demanda claridad y firmeza. Los resultados confirmaron esa necesidad. Un nuevo escenario donde las agrupaciones de centro desaparecen, aumenta la polarización, pero al mismo tiempo gana en claridad. El centro puede resurgir solo si acomete una renovación de ideas y estructuras. La izquierda no tiene tal urgencia, aunque le conviene un examen crítico.

La izquierda, representada por el FMLN, ha vuelto a demostrar, en elecciones presidenciales, que no sabe ganar. Fácilmente se enreda en las trampas que le tiende su adversario principal. Se ha mostrado incapaz de imponer su propia agenda en el debate político e incluso incapaz de imponer el debate. De forma que la derecha de ARENA, con habilidad, pudo eludir el debate directo e imponer su agenda de temas, desde su aplastante superioridad, en la sobresaturación mediática. Colocada a la defensiva, la izquierda del FMLN reaccionó tarde y mal a la campaña sucia, con su propia campaña sucia, cayendo también en esto en la trampa de su enemigo. Desconectada su campaña del programa de revolución democrática, que debería inspirar toda su conducta durante la transición, no supo retomar la iniciativa y terminó con una campaña floja en contenidos, en propuestas y en visión estratégica. Dureza verbal, pero debilidad de ideas; radicalismo en las formas, simple posibilismo en los contenidos. A pesar de ello, sin el dramático vuelco masivo a las urnas, la izquierda hubiera podido estar cerca del triunfo o, por lo menos, de obtener un resultado reñido, visto el importante crecimiento en la cantidad de votos.

El proceso electoral ha demostrado, asimismo, que esta derecha no está dispuesta a perder, no está preparada para perder. Sus percepciones antes de las elecciones, pese a las predicciones tranquilizadoras de la mayoría de las encuestas, eran de alarma. Su reacción fue echar mano a todas las palancas posibles, incluidas las ilegítimas e ilegales. El uso de propaganda "privada" para la campaña sucia, de un mercenario —un delincuente, porque violó varias de las normas del Código Electoral, ante la

pasividad de un Tribunal Supremo Electoral paralizado, por su sistema de voto cualificado— fue el hecho más connotado. El papel de ciertos medios de comunicación social, cuyos propietarios promovieron una parcialidad escandalosa y denotaron falta de profesionalismo y de ética periodística, fue, asimismo, revelador. También las amenazas a trabajadores y empleados, por parte de varios empresarios, asustándolos con la pérdida del empleo. De igual forma, el tema de las remesas y la permanencia de los emigrantes en Estados Unidos, en supuesto peligro, si ganaba el FMLN, campaña a la que se sumaron algunos funcionarios prominentes de dicho país.

No obstante, el detalle más revelador del temor de la derecha oligárquica y de su poca disposición a respetar los resultados, fue el movimiento de fuga de capitales, en las cuatro semanas anteriores a las elecciones. Salieron del sistema bancario nacional, en ese breve lapso, 196.4 millones de dólares. ¿Cuánto más hubieran sacado del país antes del 1 de junio, si el FMLN hubiese ganado las elecciones? La disposición de la derecha económica a descapitalizar la nación, en caso de una victoria opositora, muestra su escaso patriotismo, su desprecio a la democracia y su voluntad desestabilizadora. La introducción del tema de Venezuela y de su crisis interna en la campaña, por la derecha, refleja así su verdadera naturaleza: era una amenaza. El mensaje era: estamos dispuestos a seguir las mismas tácticas que usa la clase dominante venezolana y a impedir la gobernabilidad, si gana el FMLN. Es algo con lo cual la izquierda deberá contar: la oposición militante de la clase y no solo de la derecha, derrotada electoralmente, en caso de que un día lograra arribar al Ejecutivo. Lo atípico de las elecciones de 2004, su dimensión clasista, ha dejado esta lección histórica.

El FMLN, al menos su actual dirigencia, ha mostrado que tampoco sabe perder. El discurso, en la noche de la jornada electoral, es inadmisibles. Si al pueblo le falta cultura democrática, hay que decir que a su "vanguardia" le falta todavía más. ¿Cómo va a exigir la izquierda respeto a la voluntad popular, si irrespeta con sus actitudes esa misma voluntad cuando no le es favorable? La tradición democrática de felicitar al ganador es una forma de reconocer el resultado, de ofrecer lealtad, en la conducta opositora, y de respetar a la población que votó por el adversario. Rehusar la habitual felicitación es un gesto inapropiado, que no ayuda ni

a la cultura democrática ni a quien asume dicha actitud. La postura posterior de achacar exclusivamente a "factores externos", es decir, a la campaña de ARENA la derrota, significa rehuir la responsabilidad por el fracaso y eludir el necesario análisis y la autocrítica de los errores cometidos. Tampoco revela madurez democrática pretender que no hubo derrota, al valorar de forma exclusiva y unilateral el aumento de la propia votación. Se gana con la mitad más uno de los votos válidos emitidos, por lo tanto, lo decisivo es el porcentaje obtenido. Otra lectura de los resultados es caer en un triunfalismo absurdo y no pasa de ser el ya conocido dicho de pretender tapar el sol con un dedo. La izquierda, hoy más que nunca, necesita un baño de realismo y dejar de vivir atrapada en sus propias fantasías. Tampoco se trata de echar por la borda todo lo alcanzado o de no valorar los avances logrados, a pesar del fracaso. Mucho menos de caer en el pragmatismo y confundirlo con el necesario realismo político.

ARENA y el presidente electo deberán demostrar que saben ganar. El triunfo puede volverse una victoria pírrica, si no valoran de manera conveniente el marco de crisis nacional latente, en cual se da, y las turbias perspectivas de un modelo que viene agotándose en la misma medida en que se han ido cerrando las posibilidades para asumir mayores niveles de endeudamiento para el país. Viene la hora de pagar la factura por todo lo que los gobiernos anteriores de ARENA despilfarraron o hicieron a puro endeudamiento externo. Es tiempo también para corregir los graves costos sociales, los desequilibrios económicos y la marginación de ciertos sectores. Sobre todo, debe corregirse el estilo autoritario de conducción y el exagerado presidencialismo, defectos que se han dado de manera más acusada en el último gobierno de ARENA. Urge que el partido de gobierno asuma el método del diálogo y de la concertación. El costo de ceder algunas veces, siempre será menor que el de pretender no ceder nunca y cerrarse ante cualquier crítica o iniciativa opositora. Si Elías Antonio Saca cumple con su programa y con sus promesas de campaña, podría ganar lo que ahora no está claro ha obtenido: el voto de la credibilidad, en lugar del voto por el miedo. Lo más decisivo es un cambio en las prioridades de su gobierno, que demuestre que la primera de todas es la sensibilidad social. Si el sistema no logra hacerse de "un rostro humano" que resulte convincente, lo que puede venir es una agudización de la crisis, en todos los niveles, de insospechadas consecuencias. Es el ver-

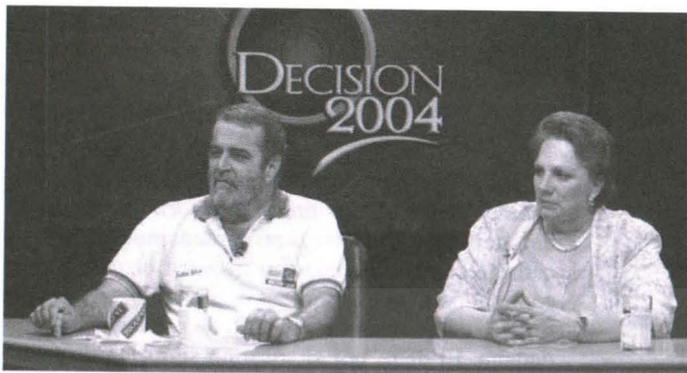
dadero peligro de la ingobernabilidad que acecha, aquella con raíces en la sociedad, más que una incubada en la vida legislativa.

2. Los resultados

La primera sorpresa fue el alto nivel de participación electoral, sin precedentes en la transición democrática. Votaron, aproximadamente, dos de cada tres salvadoreños inscritos en el padrón. La cantidad oficial asciende a 2 227 473 votos, que representan el 67.34 por ciento de participación ciudadana. El dato, por sí solo, no significa un fortalecimiento de la democracia en su credibilidad o en la conciencia política de la población. No puede hacerse la valoración de las cifras sin valorar también el conjunto de factores que incidieron en este evento electoral, que lo volvieron atípico y de carácter extraordinario. Ha roto tendencias anteriores de elevado absentismo, pero tampoco representa una nueva tendencia hacia mayores niveles de participación. Está por verse si los índices se mantienen en las próximas elecciones.

Hay quien afirma que la elevada participación cobró sus propias víctimas: el centro. Es una verdad a medias. El PCN obtuvo 61 781 votos, que representan el 2.71 por ciento, es decir, no alcanzó el techo mínimo del 3 por ciento, que le permitiría seguir existiendo legalmente. Asimismo, la Coalición, que necesitaba el 6 por ciento, quedó lejos de ese mínimo con el 3.9 por ciento, correspondiente a 88 737 votos. En ambos casos, el desempeño fue negativo no solo en porcentajes. El PCN perdió 119 387 votos, respecto a las elecciones de 2003, mientras que los partidos de la Coalición, PDC y CDU, perdieron, en conjunto, 76 648 votos. La debacle del llamado centro político alimentó, sin duda, el caudal de ARENA, con una cantidad de votos nada despreciable, pues dicha sangría suma 196 035 votos, que, en gran parte, puede presumirse se movieron al partido oficial. Las tesis centristas de superar la polarización y asegurar la gobernabilidad, aunque formalmente razonables, no resistieron la verdad de las contradicciones de clase, que imperaban en este momento del proceso. Pregonado a los cuatro vientos por la derecha como una situación de vida o muerte, de "salvar nuestro sistema de vida", la tibieza del centro solo alimentó la desconfianza del electorado o su percepción de que su voto por él no sería útil.

¿No es posible saber cuánto del voto del FMLN fue, en realidad, un voto de rechazo a ARENA, al



igual que lo contrario, cuántos votos de ARENA fueron más bien votos contra el FMLN. Las características especiales de la campaña a las cuales ya hicimos referencia permiten suponer que el voto de rechazo, en ambas direcciones, fue grande. Ni la derecha ni la izquierda pueden estar seguras de contar con ese respaldo en las próximas elecciones. Es una verdad política. Se ha dicho, y es una verdad matemática, que ARENA alcanzó un nivel de votación histórico, nunca antes alcanzado. Con 1 314 436 votos, el partido en el gobierno se siente ampliamente respaldado. Sobre todo porque sobrepasó en medio millón de votos a su principal oponente. Gana por cuarta vez consecutiva la Presidencia de la República, ahora en primera vuelta y con un desahogado margen del 57.71 por ciento de la votación. Son resultados por encima de sus expectativas, sobre todo tras haber sido superado, en 2003, en casi 30 mil votos por el FMLN. Pero ARENA debe evitar el riesgo del triunfalismo, no solo por su falta de correlación en la Asamblea Legislativa, o por el natural desgaste que le supondrán veinte años consecutivos en el gobierno, sino también por el riesgo de no poder consolidar este respaldo. No será fácil repetir una campaña tan multimillonaria como la actual ni está garantizado que los resortes emotivos y de engaño, que ahora le funcionaron, vayan a ser efectivos si los repite.

El FMLN alcanzó también su mayor votación histórica, 812 519 votos. Su desempeño, respecto a las anteriores elecciones presidenciales, las de 1999, cuando solo logró 343 472 votos, indica que incrementó en 114 por ciento su caudal electoral. Más del doble de entonces. Todo eso es una verdad matemática. Pero la verdad política es que perdió frente a ARENA, que no logró ni siquiera forzar una segunda ronda electoral; que la derecha consiguió 500 mil votos más y, lo más importante,

que la diferencia porcentual es del 22 por ciento. Los datos reflejan cierta ambivalencia y la izquierda así debería considerarlos y evaluarlos. Pero pretender que las cifras no son una derrota, porque ha habido crecimiento, sería como plantearse que la victoria llegará en varias décadas. Tampoco es correcto ver solo los aspectos desfavorables. Cierta lectura de los hechos, que se niega a la revisión autocrítica, cae en la postura contraria.

Por otro lado, la dirección del FMLN planteaba, al inicio de la campaña, que “el Frente gana con cualquier candidato”, pero hoy pareciera irse al otro extremo: “con cualquier candidato el Frente perdía”. Adjudicar únicamente a lo que hizo el otro las causas de lo ocurrido, no solo imposibilita un análisis dialéctico de la cuestión, sino que, además, es contrario a toda lógica elemental. La defensa del marco democrático y de las reglas de juego establecidas, empezando por no iniciar la campaña antes de las fechas estipuladas, puede ser la mejor forma de defender la transición democrática y de entorpecer las prácticas tramposas y abusivas de la derecha. Pero la izquierda no optó por este camino, sino por el contrario, el de tratar de competir con la derecha, incluso en lo ilegal y en lo ilegítimo. La revisión debe abarcar todos los aspectos, incluida la fórmula y su conducta a lo largo de la campaña. Lo cual no debe oscurecer el hecho de que más importante que las personas son los proyectos, más allá de la figura de los candidatos lo determinante es la propuesta política y el planteamiento de base sobre el que se apoya.

3. Las plataformas electorales

El eje de la campaña de ARENA contra el FMLN se centró en la acusación de que la llegada al poder del partido de izquierda significaría la entronización del comunismo y la instauración de un régimen político similar al de Cuba. Sin embargo, en la plataforma electoral del FMLN no hay ningún elemento que sugiera tal cosa. En ella se hablaba de gobernar el país con respeto irrestricto a los principios constitucionales y de sustituir el modelo económico neoliberal por otro, que superara la crisis económica y social, producto de los quince años de gobierno de ARENA. En esta línea, el FMLN proponía construir un Estado descentraliza-

do y económicamente fuerte con el fin de priorizar el gasto social para mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo de los sectores más pobres; practicar el método de la concertación social y política, extender la democracia, más allá de su dimensión política; y promover el respeto y el cumplimiento universal de las leyes vigentes.

A partir de estos objetivos generales, el FMLN proponía realizar una reforma fiscal, renegociar la deuda pública, reformar la orientación del gasto público, descentralizar la inversión e impulsar el desarrollo regional, combatir la corrupción, elevar los salarios del campo y de la ciudad, impedir una nueva privatización de los bienes y servicios estatales, restablecer la circulación del colón, revisar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, reducir las tarifas de los servicios públicos, apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios, crear una banca nacional de desarrollo, regular la actividad financiera privada, fomentar activamente la inversión nacional y extranjera, y realizar una reforma integral de la educación. La única referencia explícita a Cuba se encuentra en la propuesta de una nueva política exterior, fundamentada en la apertura de relaciones con todos los países del mundo, en un espíritu centroamericanista y latinoamericanista.

Si bien se le puede criticar al FMLN que su oferta política no incluía el financiamiento de estas medidas y de no definir los mecanismos concretos de ejecución, no se puede afirmar que su plataforma electoral sea socializante ni mucho menos que pretendiera impulsar un modelo socialista al estilo cubano. Si nos ceñimos estrictamente al contenido de su plataforma y de su plan de gobierno, se puede afirmar que sus políticas respondían más a los intereses de los sectores pobres urbanos, los sectores medios y de ciertos sectores empresariales nacionales, marginados o desfavorecidos por la agenda neoliberal de los gobiernos de ARENA, en los últimos quince años.

Ciertamente, el ideario del FMLN propone el socialismo como objetivo último de su acción política, pero éste se entiende más bien como un ideal utópico, al cual aspira, como una situación límite u horizonte último, que orienta y da sentido a sus acciones políticas, pero no como un modelo económico y social viable, que pretenda implantar en el momento presente de El Salvador. La dirigencia actual del FMLN y las diferentes tendencias que lo conforman tienen claro que, en las actuales circunstancias históricas del país, de la región y del

mundo, no están dadas las posibilidades reales para intentar implantar un modelo socialista, incluido el llamado "socialismo real" de los países ex comunistas del este europeo. Y si bien la mayoría de su dirigencia utiliza el marxismo como teoría y método de análisis de la realidad social, no hay evidencia de que lo asuma dogmática o ideologizadamente. A pesar de lo que sus opositores políticos, y disidentes y ex comandantes que se separaron del partido han afirmado, la actual dirigencia del FMLN ha asimilado las transformaciones, tanto teóricas como prácticas, que el marxismo ha venido experimentado, desde la década de los setenta, cuando se inició lo que se dio en llamar la "crisis del marxismo", la cual culminó en el derrumbe del modelo socialista soviético, en 1989.

Esto no significa que la izquierda salvadoreña haya revivido la teoría de la revolución en etapas —primero capitalismo democrático y socialismo después—, que asumieron los partidos comunistas de la era soviética, pues ahora se está consciente del fracaso del marxismo economicista, que predominó en aquella época, y en base a la cual se proclamaba el advenimiento inexorable del socialismo y del comunismo, en virtud de las leyes de la historia. El socialismo solo será factible y realizable en El Salvador si existen las condiciones y las circunstancias históricas que lo hagan posible. Para el FMLN, por ahora, solo es posible construir una amplia democracia participativa dentro del marco de las relaciones capitalistas de producción.

Su lucha como partido político, en la actual etapa de la transición, no es contra el sistema capitalista, sino contra el modelo neoliberal, como en repetidas ocasiones lo afirmó su candidato durante la campaña electoral. Y no es lícito identificar capitalismo y neoliberalismo, como maliciosamente lo hizo y lo divulgó la propaganda de la derecha, con el fin de presentar al FMLN como un partido antisistema. El neoliberalismo, en una de sus dimensiones principales, es solo un modo de gestionar la economía de un país, en una dirección determinada y en función de los intereses económicos de ciertos sectores empresariales, pero de ninguna manera es el único modelo ni mucho menos el modelo que mejor responde a la solución de los graves problemas que enfrenta el país, en la actualidad.

Por lo tanto, se puede afirmar, más allá de la propaganda electoral de la derecha y ceñiéndose estrictamente al plan de gobierno, impulsado en las últimas elecciones, que el FMLN tiende más a postu-

ras de centro izquierda, o a lo que se ha dado en llamar "izquierda democrática", que a posturas de ultra o de extrema izquierda, en una orientación similar a las políticas impulsadas, en la actualidad, por los gobiernos de Kirchner, en Argentina, y Lula, en Brasil, divergentes de las políticas neoliberales, adoptadas y ejecutadas por los gobiernos anteriores. A pesar de su pasado guerrillero, el FMLN actual converge con el centro izquierda del cono sur, en una estrategia que acepta los principios básicos de una economía de mercado, pero que busca, a través de las políticas estatales, regular sus excesos y aumentar el gasto social para aliviar la extrema pobreza. No hay, en este sentido, una crítica estructural al sistema capitalista, ni se busca, por consiguiente, su superación, sino una crítica al modelo de gestión neoliberal, que se ha venido ejecutando en la última década. Se puede decir que el FMLN tiene ahora una postura realista que, sin abandonar los valores del socialismo —justicia, igualdad y solidaridad—, presta más atención a las exigencias de la realidad y a lo que es posible realmente hacer en cada coyuntura. Busca ir modificando las situaciones, en una dirección que no sea incompatible con su horizonte ético-utópico, que orienta su acción política transformadora.

No hay que confundir el realismo político con el pragmatismo. El pragmatismo político, a diferencia del realismo, no asume valores ni principios para definir su identidad y orientar su acción política, sino que se va adaptando, de una manera acomodaticia, a la diversidad de situaciones y va modificando continuamente sus posiciones políticas con vistas a sacar ventajas inmediatas para el grupo dirigente o el partido. Pragmáticamente, todas las posturas y acciones políticas se pueden asumir, en cualquier momento, según se considere conveniente y útil con tal de conseguir los propios fines políticos e incluso personales. Así se puede ser de derecha o de izquierda o ubicarse en el centro, y actuar de manera política consecuente con ello. Se puede hablar aquí, si se quiere, de maquiavelismo, en el sentido de que en política, el fin justifica los medios, ya sea para alcanzar el poder del Estado o para conservarlo, y porque se piensa que las consideraciones éticas no tienen que interferir en las decisiones políticas o que anteponer una moral a lo que es la realidad política, en su funcionamiento fáctico, lleva al fracaso político.

Desde una perspectiva política, todavía cabe hablar de otra postura fundamental, el principismo. A

diferencia del realismo y del pragmatismo, el principismo afirma de manera absoluta los propios principios y valores, sin tomar en cuenta la realidad histórica. Se trata de realizar, a toda costa, lo que se considera éticamente correcto, al margen de lo que las circunstancias y las situaciones concretas ofrecen como posibilidades reales. Es la realidad la que tiene que adaptarse a la propia ideología y a lo que se cree éticamente bueno y, por eso, no se acepta ningún tipo de concesión o componenda, que suponga una contradicción con lo que se cree es el bien, o conciliación alguna con situaciones que se consideran contrarias a los propios principios. Esta postura se manifiesta, en la práctica, en voluntarismo y en posturas radicales de derecha o de izquierda, las cuales siempre están chocando con la realidad de los hechos.

En la realidad política del país es relativamente fácil encontrar ejemplos de estas tres posturas fundamentales, pero lo que no se puede afirmar es que el FMLN haya asumido, en lo fundamental, una postura principista o una pragmática. Desde que se incorporó a la vida política del país, después de los acuerdos de paz, el FMLN ha optado por el formato de un partido político electoral. En consecuencia, ha impulsado políticas más de carácter antineoliberal que de carácter anticapitalista, dentro de una plataforma de administración honesta, de aumento del gasto social y de promoción de empresas capitalistas nacionales, según apuntamos antes. No es que haya perdido su identidad de clase y su carácter revolucionario, pero éstos han quedado bastante matizados si consideramos lo que fue su plataforma, cuando era un movimiento guerrillero, en la década de los ochenta. Ahora, el objetivo principal de su proyecto político es aglutinar y liderar un frente nacional, una amplia coalición de grupos y movimientos sociales contra el neoliberalismo y construir las bases de una democracia, apegada estrictamente a los principios constitucionales. Es un proyecto coherente, desde la perspectiva de un partido que busca competir en las urnas y gobernar el sistema, mediante la ejecución de una serie de reformas, respaldada por una alianza multclasista, cimentada y cohesionada por su oposición al modelo neoliberal y bajo el supuesto discutible de que existe una clase capitalista dispuesta a compartir parte de su riqueza y de sus ganancias para financiar programas sociales, dirigidos a aliviar o a erradicar la extrema pobreza.

Desde el momento en que el socialismo no está en su agenda, el FMLN considera que su proyecto

actual es viable y es el más consecuente con una postura de izquierda, dadas las circunstancias de El Salvador. Y esta postura le ha dado frutos en la última década. Es la fuerza mayoritaria en la Asamblea Legislativa, controla las alcaldías más importantes del país y su votación ha venido creciendo desde 1997, hasta alcanzar, en las elecciones de 2004, un elevado respaldo de la ciudadanía. Por el contrario, los proyectos políticos de los ex comandantes disidentes Joaquín Villalobos y Facundo Guardado —el Partido Demócrata y el Movimiento Renovador— fracasaron de manera estrepitosa, hasta el punto de desaparecer, en sus estrenos electorales, en lo fundamental, por su intento de diseñar un supuesto proyecto de “izquierda democrática”. Era un proyecto inspirado en la socialdemocracia, pero que, en la práctica, suponía una ruptura con los movimientos sociales de izquierda y con la base tradicional del FMLN, al apoyar la ejecución de las políticas neoliberales del gobierno. Para estos políticos, el FMLN debería adoptar un discurso pragmático, renunciar al marxismo y a la visión socialista de futuro y colaborar y co-gobernar con la derecha para consolidar la democracia, alcanzada después de los acuerdos de paz, que, según ellos, fue el objetivo fundamental de la lucha armada. El colmo de estas posturas es que, desde esta premisa, ambos dirigentes califican a ARENA como una fuerza progresista y al FMLN como una fuerza conservadora, por no insertarse y adaptarse a la dinámica de la globalización neoliberal que, para ellos, es la única posible y viable. ❖

Los términos “izquierda” o “derecha” califican proyectos y comportamientos políticos dentro de determinados contextos históricos, y por ello no se pueden definir en abstracto. No es lo mismo ser de izquierda o derecha aquí, en El Salvador, o en España. Lo que puede ser de “izquierda” en un país europeo occidental se puede considerar como de “derecha”, en un contexto como el centroamericano o el salvadoreño. En este contexto, no basta que una fuerza política asuma los principios de la socialdemocracia europea, por ejemplo, para que sea considerada sin más como una fuerza de izquierda o de centroizquierda. Y lo mismo se puede decir del socialcristianismo. Para determinar si una posición política es de izquierda, en una situación concreta, se tendría que analizar si el programa o el proyecto de una fuerza social o política implica una transformación real del orden establecido, desde la perspectiva de los sectores y grupos sociales excluidos dentro de dicho orden. No tiene sentido

autoproclamarse como siendo de izquierda o de centroizquierda en una situación como la de El Salvador y, en la práctica, aceptar los principios básicos del neoliberalismo y buscar un nicho dentro del *status quo*.

Esta fue una de las razones que también explica, en parte, el fracaso de la Coalición CDU-PDC, que se presentó como abanderada del cambio social responsable y moderado frente a lo que consideraba radicalismo y extremismo del FMLN. Por un lado, el CDU, identificado ideológicamente con la socialdemocracia, pero con una estructura organizativa débil y una plataforma electoral ambigua; y por otro, el PDC, un partido socialcristiano dividido y venido a menos, desde la década pasada, con un comportamiento en la Asamblea Legislativa muy comprometido con la agenda gubernamental. Además, el llamado de la Coalición por un “país compartido” partía del falso supuesto de que el país estaba a merced de dos fuerzas políticas extremas que, debido a su confrontación, no solo no ofrecían soluciones reales a los principales problemas del país, sino que los agravaban al polarizar y dividirlo. Sin embargo, en la actualidad, ni ARENA ni el FMLN son fuerzas políticas extremas. Ambos partidos han sufrido profundas transformaciones de lo que fueron, durante la época de la guerra civil, y han modificado sus estructuras partidarias y sus proyectos políticos, en consonancia con la nueva realidad política de la transición. Ni ARENA es el partido “escuadrero” y ultraderechista de sus orígenes ni el FMLN es la fuerza extremista guerrillera que buscaba, a través de la lucha armada, implantar un régimen socialista. El esquema de “el centro frente a las extremas” fue el que utilizó, en la década de los ochenta, la democracia cristiana de Duarte para legitimarse como fuerza gobernante, y tenía sentido, en el marco del conflicto armado y dentro del plan contrainsurgente, impulsado por la Fuerza Armada y Estados Unidos. Pero en la actualidad, no tiene ningún asidero para dotar de viabilidad política ni para darle legitimidad a la acción política de partido político alguno, como lo demostraron con contundencia los resultados electorales.

Si el FMLN no busca, en realidad, un cambio radical del sistema y diseñó una plataforma electoral más de carácter reformista que revolucionaria, que buscaba realizarse sobre la base del apoyo de una amplia alianza de movimientos y grupos sociales de diversa índole, ¿cómo explicar su derrota en las últimas elecciones? Aparte de lo que ya se

ha dicho sobre la campaña del miedo y la mentira de la derecha, de los medios ilícitos que utilizó el partido oficial y del papel sesgado y partidarista de los grandes medios de comunicación y de las empresas del gran capital, las causas de la derrota del FMLN radicarón también en los errores que cometió, en la campaña, empezando por la elección de su candidato, y a problemas que tienen que ver con la forma de conducción del partido, su organización y el tipo de estrategia política para llevar adelante su programa. Varios analistas han señalado, en este sentido, la necesidad de que el FMLN inicie una reflexión interna seria y un proceso de transformación, que implique la democratización de su estructura partidaria, el cambio de su estrategia, preponderantemente confrontativa, la historización de sus posturas ideológicas y la viabilidad de sus propuestas políticas, en el contexto de lo que es hoy la realidad histórica de El Salvador.

Respecto a la plataforma electoral de ARENA no hay mucho que decir. Similar a la del FMLN, contiene una serie de propuestas y promesas que tampoco van acompañadas de los mecanismos concretos para hacerlas realidad, en los próximos cinco años. En ella se habla de seguridad ciudadana, de oportunidades para todos, de respeto a los derechos individuales y sociales, de un gobierno honesto y responsable al servicio del pueblo, de un progreso con equidad y de un país productivo e integrado al mundo. Sin embargo, no se ve cómo, con las mismas políticas neoliberales que se han aplicado en los últimos años, se pueda conseguir todo lo que se promete.

Los últimos informes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coinciden en señalar que el modelo neoliberal que se ha venido aplicando en El Salvador, en la última década, está agotado y necesita reformarse. Los informes señalan el aumento de la desigualdad de la pobreza y la exclusión social, el deterioro de los índices macroeconómicos y una cultura democrática débil, que se manifiesta en una reducida participación ciudadana en los asuntos públicos y en un centralismo del poder ejecutivo.

Las propuestas de solución de los organismos mencionados sostienen que una estrategia de crecimiento elevado y sostenido exige trasladar sus frutos a quienes tienen menos ingresos para disminuir la extensión y la profundidad de la pobreza y

la desigualdad. Esto exige fomentar la productividad y el empleo productivo con énfasis en la mediana, pequeña y microempresa, reconvertir y modernizar los sectores productivos, en especial el agrícola, crear o completar mercados en los sectores emergentes, corregir la desigualdad en la distribución de los activos, los ingresos y el poder, capacitar la fuerza laboral, sobre todo en el campo tecnológico, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y la seguridad ciudadana, democratizar las instituciones y dar acceso a información oportuna y veraz.

La plataforma electoral de ARENA recoge algunas de estas medidas, en un intento por cambiar el rumbo seguido hasta ahora, pero queda la duda sobre la capacidad del nuevo equipo gobernante para tomar distancia de los poderosos grupos económicos, que se han beneficiado hasta ahora del modelo neoliberal, tal y como se ha venido ejecutando. En los programas presidenciales de la plataforma se mencionan varios objetivos, como los de incorporar el uso y la masificación de las tecnologías de información y comunicación, impulsar el desarrollo regional, mejorar la calidad de vida de la población, promover la transformación productiva, desarrollar programas para los jóvenes, aumentar la seguridad ciudadana, realizar una reconversión productiva del sector agropecuario y apoyar y desarrollar el deporte en las comunidades marginadas.

Según esto, es de esperar que el gobierno de Saca se centre más en los aspectos sociales de lo que lo han hecho los gobiernos anteriores de ARENA, pero su principal reto será superar con hechos la orientación de dichos gobiernos, cuyas políticas han favorecido casi de forma exclusiva a una elite multimillonaria.

4. La campaña electoral

Los resultados de las recién pasadas elecciones podrían ser utilizados, por más de algún "pragmático" analista político, para justificar un esquema "maquiavélico" de las estrategias de las campañas electorales. Y si bien hay que guardar ciertas distancias de rigor al tratar de achacar al filósofo florentino las lecturas que se han hecho de sus ideas, aquello de que "el fin justifica los medios" pende de forma peligrosa sobre los receptores usuales de conclusiones apresuradas. Después de todo, pocas veces hubo tanto consenso sobre la cantidad de "mugre" acumulada en los anuncios radiales, los comerciales de televisión y las vallas publicitarias

del campo y de la ciudad, donde las amenazas competían con el insulto y con un verdadero “terrorismo”, dirigido a las mentes medianamente ilustradas o simplemente sensatas. Y es que nadie se atreve a negar que se acumularon de forma *justificada* las protestas por la campaña sucia, que inició la derecha y secundó —tarde— la izquierda.

El reconocimiento de que había algo podrido provino incluso del mismo candidato de ARENA, quien sin restarles legitimidad del todo, tomó cierta distancia de los anuncios que mostraban cruces, en campos desolados, o pretendían conmovernos con las lágrimas de unos viejecitos, preocupados por las remesas, ese “vital líquido”. La campaña sucia existió y no se intenta tapan el sol con el dedo; pero esto no es obstáculo para que algunos señalen que los resultados *justifican, por sí solos*, el uso de los mensajes publicitarios por parte de los contendientes. Todavía más, y refiriéndose en concreto a la propaganda del FMLN, ¿no será que para quebrar al contrincante *deberíamos utilizar sus mismos medios?*

Lo peligroso de sacar conclusiones “pragmáticas” es que implica una cierta visión de *corto plazo*, la cual será importante, pero nunca debería ser la única. Antes de decidirse por los medios que servirán para los fines propuestos, se debe dejar claro qué se va entender por *fines legítimos*. No es motivo de mucha alegría obtener el “voto del miedo”, sobre todo porque con estas elecciones no se da por concluida la incipiente democracia salvadoreña. Lo que sabe a triunfo ahora puede resultar amargo, cuando llegue el momento de rendir cuentas. Después de todo, lo peligroso de someterse a la lógica fría de los cálculos instrumentales o estratégicos (“con *x* medios —recursos, armas— obtendré *x* fines —producción, victoria”) es que “el otro” (competidor, adversario) puede utilizarlo en contra.

Algo así podría suceder al disiparse las tinieblas construidas con tanto esfuerzo. La derrota del demonio llevaría a la paradójica situación en la que el vencedor debe reinventarse, no como “el defensor frente a la amenaza roja”, sino como el que va a

sacar adelante al país de sus muchas dificultades. Después de todo, el votante habría tomado en cuenta otros aspectos importantes de la vida nacional. Cabe suponer, entre otras cosas, que la misma reacción de la mayoría de quienes votaron contra el FMLN lleva implícita aspiraciones y fines que se pretenden alcanzar o conservar, los cuales no se reducen a la mera derrota del partido de izquierda. La reacción de este elector, ante un gobierno de ARENA incapaz de enfrentar los problemas reales del país, podría ser contundente y despiadada, si interpreta la ausencia de rumbo como una tomadura de pelo o, al menos, como un error, el cual es posible remediar en las próximas elecciones.

Esto nos lleva al asunto de la supuesta influencia publicitaria en la ciudadanía. Si bien es cierto que la campaña habría tenido un papel nada despreciable a la hora de influir en un electorado apático por tradición, la abultada diferencia entre ARENA y el FMLN no permite una interpretación exclusivamente mediática de la victoria de la derecha. Y con esto no queremos decir que no pudo ser uno de los elementos determinantes, sino que, *por sí sola*, ninguna campaña publicitaria logra in-

No son pocos los que, en efecto, han señalado que el problema de la pasada campaña debe enfocarse desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos y se ha hablado de una *violación* del derecho a la *libre* información (Art. 19), en tanto que la que se recibe no es veraz o resulta ser evidentemente manipuladora, [...]

fluir de modo tan contundente. Por lo menos no hay un estudio que permita sacar tal conclusión. Más bien, hay una combinación de factores, en primer lugar, de índole propagandística, los cuales se combinaron con la campaña mediática de todos conocida. Se han escuchado rumores de amenazas, más o menos directas, en empresas y centros de trabajo; si esto es cierto, la propaganda abierta, aunque sucia, habría estado acompañada de una verdadera “campaña de terror”, pues no puede entenderse de otra manera el que se utilicen los salarios, las remesas o las inscripciones “voluntarias” al partido de gobierno como instrumento de “persuasión política”.

No solo se trata de restar peso a la campaña “pública”, en aras de otra “subterránea”, pues con ello no se haría más que reforzar la idea de la preponderancia de los instrumentos de persuasión por

ha dicho sobre la campaña del miedo y la mentira de la derecha, de los medios ilícitos que utilizó el partido oficial y del papel sesgado y partidista de los grandes medios de comunicación y de las empresas del gran capital, las causas de la derrota del FMLN radicarón también en los errores que cometió, en la campaña, empezando por la elección de su candidato, y a problemas que tienen que ver con la forma de conducción del partido, su organización y el tipo de estrategia política para llevar adelante su programa. Varios analistas han señalado, en este sentido, la necesidad de que el FMLN inicie una reflexión interna seria y un proceso de transformación, que implique la democratización de su estructura partidaria, el cambio de su estrategia, preponderantemente confrontativa, la historización de sus posturas ideológicas y la viabilidad de sus propuestas políticas, en el contexto de lo que es hoy la realidad histórica de El Salvador.

Respecto a la plataforma electoral de ARENA no hay mucho que decir. Similar a la del FMLN, contiene una serie de propuestas y promesas que tampoco van acompañadas de los mecanismos concretos para hacerlas realidad, en los próximos cinco años. En ella se habla de seguridad ciudadana, de oportunidades para todos, de respeto a los derechos individuales y sociales, de un gobierno honesto y responsable al servicio del pueblo, de un progreso con equidad y de un país productivo e integrado al mundo. Sin embargo, no se ve cómo, con las mismas políticas neoliberales que se han aplicado en los últimos años, se pueda conseguir todo lo que se promete.

Los últimos informes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coinciden en señalar que el modelo neoliberal que se ha venido aplicando en El Salvador, en la última década, está agotado y necesita reformarse. Los informes señalan el aumento de la desigualdad de la pobreza y la exclusión social, el deterioro de los índices macroeconómicos y una cultura democrática débil, que se manifiesta en una reducida participación ciudadana en los asuntos públicos y en un centralismo del poder ejecutivo.

Las propuestas de solución de los organismos mencionados sostienen que una estrategia de crecimiento elevado y sostenido exige trasladar sus frutos a quienes tienen menos ingresos para disminuir la extensión y la profundidad de la pobreza y

la desigualdad. Esto exige fomentar la productividad y el empleo productivo con énfasis en la mediana, pequeña y microempresa, reconvertir y modernizar los sectores productivos, en especial el agrícola, crear o completar mercados en los sectores emergentes, corregir la desigualdad en la distribución de los activos, los ingresos y el poder, capacitar la fuerza laboral, sobre todo en el campo tecnológico, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y la seguridad ciudadana, democratizar las instituciones y dar acceso a información oportuna y veraz.

La plataforma electoral de ARENA recoge algunas de estas medidas, en un intento por cambiar el rumbo seguido hasta ahora, pero queda la duda sobre la capacidad del nuevo equipo gobernante para tomar distancia de los poderosos grupos económicos, que se han beneficiado hasta ahora del modelo neoliberal, tal y como se ha venido ejecutando. En los programas presidenciales de la plataforma se mencionan varios objetivos, como los de incorporar el uso y la masificación de las tecnologías de información y comunicación, impulsar el desarrollo regional, mejorar la calidad de vida de la población, promover la transformación productiva, desarrollar programas para los jóvenes, aumentar la seguridad ciudadana, realizar una reconversión productiva del sector agropecuario y apoyar y desarrollar el deporte en las comunidades marginadas.

Según esto, es de esperar que el gobierno de Saca se centre más en los aspectos sociales de lo que lo han hecho los gobiernos anteriores de ARENA, pero su principal reto será superar con hechos la orientación de dichos gobiernos, cuyas políticas han favorecido casi de forma exclusiva a una elite multimillonaria.

4. La campaña electoral

Los resultados de las recién pasadas elecciones podrían ser utilizados, por más de algún "pragmático" analista político, para justificar un esquema "maquiavélico" de las estrategias de las campañas electorales. Y si bien hay que guardar ciertas distancias de rigor al tratar de achacar al filósofo florentino las lecturas que se han hecho de sus ideas, aquello de que "el fin justifica los medios" pende de forma peligrosa sobre los receptores usuales de conclusiones apresuradas. Después de todo, pocas veces hubo tanto consenso sobre la cantidad de "mugre" acumulada en los anuncios radiales, los comerciales de televisión y las vallas publicitarias

del campo y de la ciudad, donde las amenazas competían con el insulto y con un verdadero “terrorismo”, dirigido a las mentes medianamente ilustradas o simplemente sensatas. Y es que nadie se atreve a negar que se acumularon de forma justificada las protestas por la campaña sucia, que inició la derecha y secundó —tarde— la izquierda.

El reconocimiento de que había algo podrido provino incluso del mismo candidato de ARENA, quien sin restarles legitimidad del todo, tomó cierta distancia de los anuncios que mostraban cruces, en campos desolados, o pretendían conmovernos con las lágrimas de unos viejecitos, preocupados por las remesas, ese “vital líquido”. La campaña sucia existió y no se intenta tapar el sol con el dedo; pero esto no es obstáculo para que algunos señalen que los resultados *justifican, por sí solos*, el uso de los mensajes publicitarios por parte de los contendientes. Todavía más, y refiriéndose en concreto a la propaganda del FMLN, ¿no será que para quebrar al contrincante *deberíamos utilizar sus mismos medios?*

Lo peligroso de sacar conclusiones “pragmáticas” es que implica una cierta visión de *corto plazo*, la cual será importante, pero nunca debería ser la única. Antes de decidirse por los medios que servirán para los fines propuestos, se debe dejar claro qué se va entender por *fines legítimos*. No es motivo de mucha alegría obtener el “voto del miedo”, sobre todo porque con estas elecciones no se da por concluida la incipiente democracia salvadoreña. Lo que sabe a triunfo ahora puede resultar amargo, cuando llegue el momento de rendir cuentas. Después de todo, lo peligroso de someterse a la lógica fría de los cálculos instrumentales o estratégicos (“con *x* medios —recursos, armas— obtendré *x* fines —producción, victoria”) es que “el otro” (competidor, adversario) puede utilizarlo en contra.

Algo así podría suceder al disiparse las tinieblas construidas con tanto esfuerzo. La derrota del demonio llevaría a la paradójica situación en la que el vencedor debe reinventarse, no como “el defensor frente a la amenaza roja”, sino como el que va a

sacar adelante al país de ~~una~~ *muchas* dificultades. Después de todo, el votante habría tomado en cuenta otros aspectos importantes de la vida nacional. Cabe suponer, entre otras cosas, que la misma reacción de la mayoría de quienes votaron contra el FMLN lleva implícita aspiraciones y fines que no pretenden alcanzar o conservar, ~~los cuales no~~ *no* reducen a la mera derrota del partido de izquierda. La reacción de este elector, ante un gobierno de ARENA incapaz de enfrentar los problemas reales del país, podría ser contundente y despiadada, si interpreta la ausencia de rumbo como una *tomadura de pelo* o, al menos, como un error, el cual es posible remediar en las próximas elecciones.

Esto nos lleva al asunto de la supuesta influencia publicitaria en la ciudadanía. Si bien es cierto que la campaña habría tenido un papel nada despreciable a la hora de influir en un electorado apático por tradición, la abultada diferencia entre ARENA y el FMLN no permite una interpretación exclusivamente mediática de la victoria de la derecha. Y con esto no queremos decir que no pudo ser uno de los elementos determinantes, sino que, *por sí sola*, ninguna campaña publicitaria logra influir de modo tan contundente. Por lo menos no hay un estudio que permita sacar tal conclusión. Más bien, hay una combinación de factores, en primer lugar, de índole propagandística, los cuales se combinaron con la campaña mediática de todos conocida. Se han escuchado rumores de amenazas, más o menos directas, en empresas y centros de trabajo; si esto es cierto, la propaganda abierta, aunque sucia, habría estado acompañada de una verdadera “campaña de terror”, pues no puede entenderse de otra manera el que se utilicen los salarios, las remesas o las inscripciones “voluntarias” al partido de gobierno como instrumento de “persuasión política”.

No solo se trata de restar peso a la campaña “pública”, en aras de otra “subterránea”, pues con ello no se haría más que reforzar la idea de la preponderancia de los instrumentos de persuasión por

No son pocos los que, en efecto, han señalado que el problema de la pasada campaña debe enfocarse desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos y se ha hablado de una *violación* del derecho a la libre información (Art. 19), en tanto que la que se recibe no es veraz o resulta ser evidentemente manipuladora, [...]

ha dicho sobre la campaña del miedo y la mentira de la derecha, de los medios ilícitos que utilizó el partido oficial y del papel sesgado y partidista de los grandes medios de comunicación y de las empresas del gran capital, las causas de la derrota del FMLN radicaron también en los errores que cometió, en la campaña, empezando por la elección de su candidato, y a problemas que tienen que ver con la forma de conducción del partido, su organización y el tipo de estrategia política para llevar adelante su programa. Varios analistas han señalado, en este sentido, la necesidad de que el FMLN inicie una reflexión interna seria y un proceso de transformación, que implique la democratización de su estructura partidaria, el cambio de su estrategia, preponderantemente confrontativa, la historización de sus posturas ideológicas y la viabilidad de sus propuestas políticas, en el contexto de lo que es hoy la realidad histórica de El Salvador.

Respecto a la plataforma electoral de ARENA no hay mucho que decir. Similar a la del FMLN, contiene una serie de propuestas y promesas que tampoco van acompañadas de los mecanismos concretos para hacerlas realidad, en los próximos cinco años. En ella se habla de seguridad ciudadana, de oportunidades para todos, de respeto a los derechos individuales y sociales, de un gobierno honesto y responsable al servicio del pueblo, de un progreso con equidad y de un país productivo e integrado al mundo. Sin embargo, no se ve cómo, con las mismas políticas neoliberales que se han aplicado en los últimos años, se pueda conseguir todo lo que se promete.

Los últimos informes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coinciden en señalar que el modelo neoliberal que se ha venido aplicando en El Salvador, en la última década, está agotado y necesita reformarse. Los informes señalan el aumento de la desigualdad de la pobreza y la exclusión social, el deterioro de los índices macroeconómicos y una cultura democrática débil, que se manifiesta en una reducida participación ciudadana en los asuntos públicos y en un centralismo del poder ejecutivo.

Las propuestas de solución de los organismos mencionados sostienen que una estrategia de crecimiento elevado y sostenido exige trasladar sus frutos a quienes tienen menos ingresos para disminuir la extensión y la profundidad de la pobreza y

la desigualdad. Esto exige fomentar la productividad y el empleo productivo con énfasis en la mediana, pequeña y microempresa, reconvertir y modernizar los sectores productivos, en especial el agrícola, crear o completar mercados en los sectores emergentes, corregir la desigualdad en la distribución de los activos, los ingresos y el poder, capacitar la fuerza laboral, sobre todo en el campo tecnológico, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y la seguridad ciudadana, democratizar las instituciones y dar acceso a información oportuna y veraz.

La plataforma electoral de ARENA recoge algunas de estas medidas, en un intento por cambiar el rumbo seguido hasta ahora, pero queda la duda sobre la capacidad del nuevo equipo gobernante para tomar distancia de los poderosos grupos económicos, que se han beneficiado hasta ahora del modelo neoliberal, tal y como se ha venido ejecutando. En los programas presidenciales de la plataforma se mencionan varios objetivos, como los de incorporar el uso y la masificación de las tecnologías de información y comunicación, impulsar el desarrollo regional, mejorar la calidad de vida de la población, promover la transformación productiva, desarrollar programas para los jóvenes, aumentar la seguridad ciudadana, realizar una reconversión productiva del sector agropecuario y apoyar y desarrollar el deporte en las comunidades marginadas.

Según esto, es de esperar que el gobierno de Saca se centre más en los aspectos sociales de lo que lo han hecho los gobiernos anteriores de ARENA, pero su principal reto será superar con hechos la orientación de dichos gobiernos, cuyas políticas han favorecido casi de forma exclusiva a una elite multimillonaria.

4. La campaña electoral

Los resultados de las recién pasadas elecciones podrían ser utilizados, por más de algún "pragmático" analista político, para justificar un esquema "maquiavélico" de las estrategias de las campañas electorales. Y si bien hay que guardar ciertas distancias de rigor al tratar de achacar al filósofo florentino las lecturas que se han hecho de sus ideas, aquello de que "el fin justifica los medios" pende de forma peligrosa sobre los receptores usuales de conclusiones apresuradas. Después de todo, pocas veces hubo tanto consenso sobre la cantidad de "mugre" acumulada en los anuncios radiales, los comerciales de televisión y las vallas publicitarias

del campo y de la ciudad, donde las amenazas competían con el insulto y con un verdadero “terrorismo”, dirigió a las mentes medianamente ilustradas o simplemente sensatas. Y es que nadie se atreve a negar que se acumularon de forma *justificada* las protestas por la campaña sucia, que inició la derecha y secundó —tarde— la izquierda.

El reconocimiento de que había algo podrido provino incluso del mismo candidato de ARENA, quien sin restarles legitimidad del todo, tomó cierta distancia de los anuncios que mostraban cruces, en campos desolados, o pretendían conmovernos con las lágrimas de unos viejecitos, preocupados por las remesas, ese “vital líquido”. La campaña sucia existió y no se intenta tapar el sol con el dedo; pero esto no es obstáculo para que algunos señalen que los resultados *justifican, por sí solos*, el uso de los mensajes publicitarios por parte de los contendientes. Todavía más, y refiriéndose en concreto a la propaganda del FMLN, ¿no será que para quebrar al contrincante *deberíamos utilizar sus mismos medios?*

Lo peligroso de sacar conclusiones “pragmáticas” es que implica una cierta visión de *corto plazo*, la cual será importante, pero nunca debería ser la única. Antes de decidirse por los medios que servirán para los fines propuestos, se debe dejar claro qué se va entender por *fines legítimos*. No es motivo de mucha alegría obtener el “voto del miedo”, sobre todo porque con estas elecciones no se da por concluida la incipiente democracia salvadoreña. Lo que sabe a triunfo ahora puede resultar amargo, cuando llegue el momento de rendir cuentas. Después de todo, lo peligroso de someterse a la lógica fría de los cálculos instrumentales o estratégicos (“con *x* medios —recursos, armas— obtendré *x* fines —producción, victoria”) es que “el otro” (compitidor, adversario) puede utilizarlo en contra.

Algo así podría suceder al disiparse las tinieblas construidas con tanto esfuerzo. La derrota del demonio llevaría a la paradójica situación en la que el vencedor debe reinventarse, no como “el defensor frente a la amenaza roja”, sino como el que va a

sacar adelante al país de sus muchas dificultades. Después de todo, el votante habría tomado en cuenta otros aspectos importantes de la vida nacional. Cabe suponer, entre otras cosas, que la misma reacción de la mayoría de quienes votaron contra el FMLN lleva implícita aspiraciones y fines que se pretenden alcanzar o conservar, los cuales no se reducen a la mera derrota del partido de izquierda. La reacción de este elector, ante un gobierno de ARENA incapaz de enfrentar los problemas reales del país, podría ser contundente y despiadada, si interpreta la ausencia de rumbo como una tomadura de pelo o, al menos, como un error, el cual es posible remediar en las próximas elecciones.

Esto nos lleva al asunto de la supuesta influencia publicitaria en la ciudadanía. Si bien es cierto que la campaña habría tenido un papel nada despreciable a la hora de influir en un electorado apático por tradición, la abultada diferencia entre ARENA y el FMLN no permite una interpretación exclusivamente mediática de la victoria de la derecha. Y con esto no queremos decir que no pudo ser uno de los elementos determinantes, sino que, *por sí sola*, ninguna campaña publicitaria logra influir de modo tan contundente. Por lo menos no hay un estudio que permita sacar tal conclusión. Más bien, hay una combinación de factores, en primer lugar, de índole propagandística, los cuales se combinaron con la campaña mediática de todos conocida. Se han escuchado rumores de amenazas, más o menos directas, en empresas y centros de trabajo; si esto es cierto, la propaganda abierta, aunque sucia, habría estado acompañada de una verdadera “campaña de terror”, pues no puede entenderse de otra manera el que se utilicen los salarios, las remesas o las inscripciones “voluntarias” al partido de gobierno como instrumento de “persuasión política”.

No solo se trata de restar peso a la campaña “pública”, en aras de otra “subterránea”, pues con ello no se haría más que reforzar la idea de la preponderancia de los instrumentos de persuasión por

No son pocos los que, en efecto, han señalado que el problema de la pasada campaña debe enfocarse desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos y se ha hablado de una *violación* del derecho a la *libre* información (Art. 19), en tanto que la que se recibe no es veraz o resulta ser evidentemente manipuladora, [...]

encima de otros factores de decisión política. Aquí conviene recordar que, al presentar el mismo mensaje a distintos públicos, no se obtiene, necesariamente, un mismo resultado. La pertenencia a una u otra tendencia ideológica no es un dato que hay que ignorar, así como el "cálculo de utilidad" que cada uno hace en el diario vivir. Sobre esto último cobra fuerza la tesis de que el FMLN falló en la elección del candidato, las propuestas programáticas y, también, con una campaña que rayaba en la demagogia. Por otro lado, si los ataques propagandísticos en contra del partido de izquierda fueron tan poderosos, ¿cómo se explica el aumento en más del 100 por ciento de votantes? Por otra parte, queda la duda de si el voto duro de los partidos es vulnerable a la propaganda o si, más bien, la adscripción ideológica es el tamiz por el cual el mensaje ha de pasar la prueba que deberá superar.

Como puede verse, no está claro si la publicidad política influye en el contrincante, en el indeciso o en el militante. Tal vez se espera que lo haga en todos o en algunos; tal vez se trata de apostar a cualquiera de ellos o a una especie de efecto acumulativo. Todavía se podrían agregar algunos elementos más a la polémica, a saber, si cualquier influencia de los mensajes en el público habría de entenderse como "inducción al voto" y no como mero dato "significativo", mas no persuasivo; si lo que pesó en esta campaña fueron los significados sugeridos (recurso al miedo, al pasado, etc.) o el efecto de saturación que lograron las puyas entre derecha e izquierda; o, *last but not least*, si el aumento considerable de votantes de uno y otro "bando" introduce nuevos elementos de análisis de la propaganda, ya sea porque cabrían dentro del grupo de los "influenciables" o porque (¡horror!) constituirían el destinatario natural de una campaña de este estilo y envergadura.

En todo caso, la respuesta a estas interrogantes deberá esperar investigaciones más profundas y menos coyunturales: es necesario saber *científicamente* qué tanto influyen las campañas, sobre quiénes, en qué dirección y qué contenidos son los más significativos. De unos resultados como los actuales y de una campaña como la realizada no se puede inferir una especie de *nexo causal* el cual, de por sí, explique el fenómeno.

Lo que sí resulta claro es que, con independencia del probable nexo entre la campaña y los resultados, aquélla debe ser evaluada desde una perspectiva ética. Y, contrario a lo que algunos sosten-

drían, incluso desde una perspectiva moral utilitarista, no se puede considerar que "el fin justifica los medios". No todos los fines pueden ser justificables. En este caso, el enunciado "la victoria electoral justifica la campaña sucia", olvida que, *a largo plazo*, la campaña podría generar más desprecio a la clase política; pero aún más, quien podría verse afectada de manera crucial es la misma participación política, ya que no es descabellado pensar que buena parte del voto a favor de la derecha, más que *debido a* la campaña, fue *a pesar* de ella.

En realidad, la apuesta de dicho enunciado sería de alto riesgo, pues la efectividad de esta clase de argumentos, que desprecian el juego democrático, dependerá también de los resultados concretos que los electores esperan obtener del nuevo gobierno. Más que hablar de un "cheque en blanco", obtenido a fuerza del miedo y la manipulación de la información, quien utiliza esos medios propagandísticos para llegar al gobierno adquiere un "préstamo hipotecario", en el cual la confianza le será "expropiada" una vez incurra en "incumplimiento" de las promesas —o la simple constatación de que las amenazas no eran más que mera cortina de humo—, y con el agravante de que ese incumplimiento puede ocurrir por exceso (medidas económicas arbitrarias, aumento del costo de la vida...) o por defecto (postergar de modo indefinido el combate a la corrupción, incumplimiento de las metas fiscales...).

Además, queda por aclarar si los efectos, a largo plazo, de los "valores" fomentados en esta campaña fueron calculados. El énfasis en los principios individualistas de la propiedad o la libertad de expresión, que en sí no tienen por qué ser asumidos como algo negativo, puede convertirse en algo contraproducente, si la defensa de la propiedad es acompañada del miedo a la alternancia política o la libertad de expresión es igualada al recurso a cualquier clase de calumnia. La educación de la población ha sido siempre parte de una genuina política utilitarista y preocupa que el mensaje enviado a tantos salvadoreños, sobre todo a niños y jóvenes, sea el de que, en la lucha política, la única regla es la ausencia de reglas; o que la vida entre fieras justifica la ley del más fuerte.

Puede parecer extraño que este análisis sea moral de corte utilitario. Se trata de plantear la postura que, *aparentemente*, coincidiría más con quienes prefieren poner los resultados como única justificación de sus acciones. Esta identificación en-

tre el maquiavelismo político y el razonamiento utilitario se da al confundir los resultados con los fines y al dar por sentado que éstos encuentran su legitimación en su *mera* realización. Pero se puede intentar un análisis que tome como parámetro de juicio moral otra tradición bastante arraigada, que goza de gran prestigio, en estos tiempos: los *derechos fundamentales* de la humanidad, entre los cuales se encuentra el *ejercicio de la ciudadanía*. Recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos derechos fundamentales se constituyen en principios rectores o estándares morales, que permiten evaluar éticamente las acciones sociales.

No son pocos los que, en efecto, han señalado que el problema de la pasada campaña debe enfocarse desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos y se ha hablado de una *violación* del derecho a la *libre* información (Art. 19)¹, en tanto que la que se recibe no es veraz o resulta ser evidentemente manipuladora, o se ha dicho que es necesario *poner límites* a tal derecho, pues en una sociedad donde las acciones de los agentes sociales y de las instituciones están sometidas a condicionamientos económicos y de presión social y política, suponiendo la ausencia de mecanismos positivos de procuración de la equidad, un igual ejercicio de ese derecho a todos los ciudadanos no está garantizado.

Estas afirmaciones se sostienen en el espíritu de las diversas "declaraciones" de derechos que ha habido a lo largo de la historia, ya que éstas han partido de esa condición especial de la cual goza la humanidad: la libertad. Es en ella que se funda la dignidad de la persona y la condición inalienable de la voluntad ciudadana. Claro, no se trata de un mero voluntarismo ni de libertinaje, un mero desarrollo del "querer", sino que presupone la coincidencia con un principio que garantizaría, de manera racional, un ordenamiento de las decisiones, en fun-

ción del bien de todos, o sea, el acto que realiza lo que debe hacer, la ley que nace de la misma razón universal y que funda, asimismo, a la libertad.

Esto explica por qué la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla el asunto fundamental de la relación entre derechos y deberes ciudadanos (Art. 29)². Así, lejos de avalar un ejercicio de la libertad de expresión, que derivaría de un mero voluntarismo libertario, con señas más que evidentes de cierto "individualismo posesivo", en sus raíces burguesas, se sostiene la necesidad de considerar este ejercicio de la libertad de un modo *fundamentalmente humano*, a saber, comunitario, asociativo y solidario. Es evidente, entonces, que el llamado a un ejercicio de *autocensura*, por parte de anunciantes (en este caso, los partidos), publicistas y medios de comunicación no debe ser confundido con intentos de control autoritario, ni mucho menos deberá ser identificado con supuestos intentos de minar el Estado de derecho.

Es pertinente, entonces, señalar tres aportes del *comunitarismo* contemporáneo al debate sobre los derechos. El primero es la necesidad de entender los derechos de los seres humanos como derechos *de* los individuos y *dentro de* unas relaciones comunitarias muy reales: si bien solo de modo *derivado* se puede hablar de derechos de grupos, las personas *no irrumpen* en los colectivos, sino que *brotan* de dicha vida colectiva. Por otra parte, la condición fundamental de la toma de conciencia, difusión y concreción de los mismos derechos individuales no se realiza sino *a partir del* entramado de signos y códigos de comunicación, que configuran y son a su vez configurados por las relaciones interpersonales, familiares, etc., en las cuales cada sujeto humano se encuentra inserto. El tercer aporte es que toda disposición sobre aquello a lo se tiene derecho, así como sobre los deberes que corresponden a éstos, deberá tomar en cuenta que no existen significados *anteriores* a los valo-

1. "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
2. "Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad (1). En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática (2). Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas (3)".

res contruidos y comunicados dentro de la comunidad en cuestión.

Un análisis minucioso de la campaña orquestada por la derecha revela que ha habido algún tipo de manipulación de los valores sociales y políticos hacia los cuales se habría buscado orientar al electorado. Ejemplo de ello sería el uso, por parte de ARENA, de los lemas "Sigamos viviendo en libertad" y "Por un país seguro", los cuales, al ser desarrollados junto con su plataforma política, exigen algún tipo de aclaración sobre la supuesta contradicción entre ambos. La ciudadanía merece una explicación, si se le presenta un ideario que contiene unos valores ligados a sus derechos fundamentales de *libertad* junto con un "plan mano superdura", el cual, a todas luces, está reñido con la vigencia universal de esos derechos, pues sostiene argumentos que excluyen *eo ipso* a los miembros de las maras del ejercicio de la misma ciudadanía.

Lo más grave con todo es que difícilmente se puede dar crédito a una campaña que, mientras predica el arraigo en las creencias de la comunidad ciudadana, hace uso de las garantías derivadas del derecho a la libertad de expresión de manera tal que no toma en cuenta *ningún tipo de límite*, surgido de los valores propios de la misma ciudadanía. No solo se han utilizado el miedo y la descalificación *a priori*, sino que se lo ha hecho amparándose en el supuesto "derecho" a utilizar tales

medios. Y nótese que, si bien podría haber grupos e individuos que admitirían y avalarían esta práctica en concreto, *ninguno de éstos* podría defender razonablemente la conveniencia de anular *el principio mismo de limitación*. Con ello se desnaturalizan los fundamentos básicos de la lógica de la argumentación ética con base en los derechos, pues estos son los principios de universalidad y reversibilidad: son principios aplicables a toda condición semejante, sin importar el lugar ocupado por los sujetos en la sociedad, y a quienes se les aplican tales principios en condición de igualdad. ¿Es que se debe proceder *en todo* como si los derechos a los que se apela no tendrían algún tipo de límite? Es evidente que esa "solución" no solo es impráctica, sino también indeseable e indebida.

Por otra parte, queda por analizar el argumento que, antes de señalar la necesidad de poner límites a la libertad de expresión, ataca la validez de la apelación a este derecho, pues, entre otras cosas, se señala que la información *falsea*, *en lo fundamental*, la historia salvadoreña (argumento de la falta de veracidad), a la vez que *dirige* la atención de los ciudadanos a problemas que *no son los más urgentes* (argumento de la ausencia de pertinencia). Si a esto se agrega la acusación de *manipulación* (argumento de la alienación de la libertad), dado el carácter abrumador de una campaña "omnipresente", puede que al *apelar a la libertad de información se pueda desnaturalizar el principio que la sostiene*.



Algunos han señalado que el problema consiste en dónde se pone el acento: ¿en "la libertad" o en "la información"? Si se opta por lo segundo, tan claro como que no cualquier información revela con objetividad las realidades sociales o como que no toda información es pertinente para las libertades ciudadanas, es el hecho de que no se puede igualar sin más la libertad de expresión con la libertad de información. Y no se trata de entrar en una discusión teórica sobre los contenidos de una y otra o si una es más abarcadora o no, sino que es poco realista que, en una sociedad donde la expresión "libertad de información" es utilizada en su sentido "mediático", se considere que son los medios de comunicación masiva los únicos "sitios" donde ocurre la libre expresión y opinión

ciudadana. Por ello, sería absurdo tomar como criterio de veracidad y pertinencia la sola presencia en la agenda mediática. Es evidente, entonces, que la mera existencia de información no garantiza que ésta sea veraz o que recoja los intereses de la ciudadanía. Por otra parte, el acento en “la libertad” revelaría de inmediato que *no toda información libera*, sea porque no puede confiarse a pie juntillas en ella, sea porque desplaza el énfasis hacia unos intereses que no son los que el ciudadano reclama.

Igual sucede si se analiza la información, desde la perspectiva de la manipulación. Condición ineludible para la validez de los derechos es que éstos son asumidos en condiciones de libertad. Si se utilizan recursos que pasan por la persuasión incisiva, que se obceca en apuntar a un lado, mientras ignora todo lo demás; si estos medios apelan al “inconsciente social”, mediante técnicas de manipulación de imágenes, sonidos, etc.; si esos mensajes son repetidos una y otra vez, buscando lograr un efecto de saturación o, por lo menos, marcando el terreno y las líneas de por dónde deberá ir el discurso y la réplica del adversario; entonces, nos quedan fuertes dudas sobre qué tanta libertad tiene el receptor del mensaje para asimilar e incorporar con creatividad los mensajes. Pues, si bien es cierto que, en una audiencia masiva, unos son más influenciables que otros, también es cierto que el tipo de mensaje y su frecuencia desempeñan un papel respecto al reconocimiento del sujeto como un igual o como alguien que puedo sujetar, alienar e instrumentalizar.

Habría que señalar, sin embargo, que no todos los que critican la campaña a partir de los derechos humanos ponen su interés en el derecho a la libertad de expresión y opinión. Otros han señalado que las campañas de ARENA y del FMLN han violado el derecho fundamental a la libertad de reunión y asociación (Art. 20)³, al colocar virtualmente fuera de los linderos de la ciudadanía a los candidatos de la izquierda y de la derecha, así como sus planes de gobierno y propuestas electorales. Se señala también la violación del derecho a la libre participación política (Art. 21)⁴, en tanto se iguala

la adscripción a unas determinadas ideas o principios con algunos hechos que serían ubicados dentro del terreno de la ilegalidad o la inmoralidad. Ambos grupos de argumentos señalan que la pasada campaña traza una línea entre lo que sería considerado “asociación legítima” y lo que no, a partir de hechos pasados (acciones terroristas, asesinatos colectivos, secuestros, etc., sucedidos durante el conflicto), los cuales ya habrían sido procesados por las estructuras democráticas y la institucionalidad.

No obstante haber algunos vacíos en este proceso de asimilación, se señala que la campaña no hace la debida justicia a la realidad del conflicto ni a las condiciones en las cuales sucedió. Pero lo más importante es que la forma de presentar los sucesos no ha desplazado el carácter de polarización típica de una guerra, lo cual no debería confundirse con la polarización que se puede esperar y desear en una sociedad democrática y abierta. La contienda electoral se presenta como si se tratase de un nuevo momento para tomar las armas, sobre la base de un escenario maniqueo y simplista, en el cual los miembros del partido de izquierda representan aún una amenaza, la cual, obviamente, no ha sido comprobada, según los estándares de evaluación de una sociedad, en la cual se puede hacer uso de los medios institucionales que existen para tales fines. Al contrario, dada la amenaza, se justifican todos los medios que no solo servirían para oponerse al enemigo (el FMLN), en esta ocasión (las elecciones del 2004), sino, y esto es lo más grave, *se justificarían todas las acciones* que sirvan para suspender las garantías derivadas de los derechos, justo en aras de defender esos derechos, y, además, por tiempo indefinido.

Aquí resulta pertinente traer a colación, una vez más, el uso que se ha hecho de los “otros medios”, señalados antes: información falsa, que se hace pasar por verdadera, presiones recibidas en los lugares de trabajo, amenazas más o menos veladas, etc. No en balde, se ha señalado que el análisis de la efectividad de esta campaña lleva a tomar en cuenta

3. “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas (1). Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación (2)”.
4. “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos (1). Toda persona tiene derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país (2). La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto (3)”.

res contruidos y comunicados dentro de la comunidad en cuestión.

Un análisis minucioso de la campaña orquestada por la derecha revela que ha habido algún tipo de manipulación de los valores sociales y políticos hacia los cuales se habría buscado orientar al electorado. Ejemplo de ello sería el uso, por parte de ARENA, de los lemas "Sigamos viviendo en libertad" y "Por un país seguro", los cuales, al ser desarrollados junto con su plataforma política, exigen algún tipo de aclaración sobre la supuesta contradicción entre ambos. La ciudadanía merece una explicación, si se le presenta un ideario que contiene unos valores ligados a sus derechos fundamentales de *libertad* junto con un "plan mano superdura", el cual, a todas luces, está reñido con la vigencia universal de esos derechos, pues sostiene argumentos que excluyen *eo ipso* a los miembros de las maras del ejercicio de la misma ciudadanía.

Lo más grave con todo es que difícilmente se puede dar crédito a una campaña que, mientras predica el arraigo en las creencias de la comunidad ciudadana, hace uso de las garantías derivadas del derecho a la libertad de expresión de manera tal que no toma en cuenta *ningún tipo de límite*, surgido de los valores propios de la misma ciudadanía. No solo se han utilizado el miedo y la descalificación *a priori*, sino que se lo ha hecho amparándose en el supuesto "derecho" a utilizar tales

medios. Y nótese que, si bien podría haber grupos e individuos que admitirían y avalarían esta práctica en concreto, *ninguno de éstos* podría defender razonablemente la conveniencia de anular *el principio mismo de limitación*. Con ello se desnaturalizan los fundamentos básicos de la lógica de la argumentación ética con base en los derechos, pues estos son los principios de universalidad y reversibilidad: son principios aplicables a toda condición semejante, sin importar el lugar ocupado por los sujetos en la sociedad, y a quienes se les aplican tales principios en condición de igualdad. ¿Es que se debe proceder *en todo* como si los derechos a los que se apela no tendrían algún tipo de límite? Es evidente que esa "solución" no solo es impráctica, sino también indeseable e indebida.

Por otra parte, queda por analizar el argumento que, antes de señalar la necesidad de poner límites a la libertad de expresión, ataca la validez de la apelación a este derecho, pues, entre otras cosas, se señala que la información *falsea*, en lo fundamental, la historia salvadoreña (argumento de la falta de veracidad), a la vez que *dirige* la atención de los ciudadanos a problemas que *no son los más urgentes* (argumento de la ausencia de pertinencia). Si a esto se agrega la acusación de *manipulación* (argumento de la alienación de la libertad), dado el carácter abrumador de una campaña "omnipresente", puede que al *apelar a la libertad de información se pueda desnaturalizar el principio que la sostiene*.



Algunos han señalado que el problema consiste en dónde se pone el acento: ¿en "la libertad" o en "la información"? Si se opta por lo segundo, tan claro como que no cualquier información revela con objetividad las realidades sociales o como que no toda información es pertinente para las libertades ciudadanas, es el hecho de que no se puede igualar sin más la libertad de expresión con la libertad de información. Y no se trata de entrar en una discusión teórica sobre los contenidos de una y otra o si una es más abarcadora o no, sino que es poco realista que, en una sociedad donde la expresión "libertad de información" es utilizada en su sentido "mediático", se considere que son los medios de comunicación masiva los únicos "sitios" donde ocurre la libre expresión y opinión

ciudadana. Por ello, sería absurdo tomar como criterio de veracidad y pertinencia la sola presencia en la agenda mediática. Es evidente, entonces, que la mera existencia de información no garantiza que ésta sea veraz o que recoja los intereses de la ciudadanía. Por otra parte, el acento en “la libertad” revelaría de inmediato que *no toda información libera*, sea porque no puede confiarse a pie juntillas en ella, sea porque desplaza el énfasis hacia unos intereses que no son los que el ciudadano reclama.

Igual sucede si se analiza la información, desde la perspectiva de la manipulación. Condición ineludible para la validez de los derechos es que éstos son asumidos en condiciones de libertad. Si se utilizan recursos que pasan por la persuasión incisiva, que se obceca en apuntar a un lado, mientras ignora todo lo demás; si estos medios apelan al “inconsciente social”, mediante técnicas de manipulación de imágenes, sonidos, etc.; si esos mensajes son repetidos una y otra vez, buscando lograr un efecto de saturación o, por lo menos, marcando el terreno y las líneas de por dónde deberá ir el discurso y la réplica del adversario; entonces, nos quedan fuertes dudas sobre qué tanta libertad tiene el receptor del mensaje para asimilar e incorporar con creatividad los mensajes. Pues, si bien es cierto que, en una audiencia masiva, unos son más influenciables que otros, también es cierto que el tipo de mensaje y su frecuencia desempeñan un papel respecto al reconocimiento del sujeto como un igual o como alguien que puedo sujetar, alienar e instrumentalizar.

Habría que señalar, sin embargo, que no todos los que critican la campaña a partir de los derechos humanos ponen su interés en el derecho a la libertad de expresión y opinión. Otros han señalado que las campañas de ARENA y del FMLN han violado el derecho fundamental a la libertad de reunión y asociación (Art. 20)³, al colocar virtualmente fuera de los linderos de la ciudadanía a los candidatos de la izquierda y de la derecha, así como sus planes de gobierno y propuestas electorales. Se señala también la violación del derecho a la libre participación política (Art. 21)⁴, en tanto se iguala

la adscripción a unas determinadas ideas o principios con algunos hechos que serían ubicados dentro del terreno de la ilegalidad o la inmoralidad. Ambos grupos de argumentos señalan que la pasada campaña traza una línea entre lo que sería considerado “asociación legítima” y lo que no, a partir de hechos pasados (acciones terroristas, asesinatos colectivos, secuestros, etc., sucedidos durante el conflicto), los cuales ya habrían sido procesados por las estructuras democráticas y la institucionalidad.

No obstante haber algunos vacíos en este proceso de asimilación, se señala que la campaña no hace la debida justicia a la realidad del conflicto ni a las condiciones en las cuales sucedió. Pero lo más importante es que la forma de presentar los sucesos no ha desplazado el carácter de polarización típica de una guerra, lo cual no debería confundirse con la polarización que se puede esperar y desear en una sociedad democrática y abierta. La contienda electoral se presenta como si se tratase de un nuevo momento para tomar las armas, sobre la base de un escenario maniqueo y simplista, en el cual los miembros del partido de izquierda representan aún una amenaza, la cual, obviamente, no ha sido comprobada, según los estándares de evaluación de una sociedad, en la cual se puede hacer uso de los medios institucionales que existen para tales fines. Al contrario, dada la amenaza, se justifican todos los medios que no solo servirían para oponerse al enemigo (el FMLN), en esta ocasión (las elecciones del 2004), sino, y esto es lo más grave, *se justificarían todas las acciones* que sirvan para suspender las garantías derivadas de los derechos, justo en aras de defender esos derechos, y, además, por tiempo indefinido.

Aquí resulta pertinente traer a colación, una vez más, el uso que se ha hecho de los “otros medios”, señalados antes: información falsa, que se hace pasar por verdadera, presiones recibidas en los lugares de trabajo, amenazas más o menos veladas, etc. No en balde, se ha señalado que el análisis de la efectividad de esta campaña lleva a tomar en cuenta

3. “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas (1). Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación (2)”.
4. “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos (1). Toda persona tiene derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país (2). La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto (3)”.

el proceso de "preparación de la candidatura", que implicó la visita a las casas, la "propaganda preelectoral", etc., así como el recurso, ya en campaña, a charlas impartidas en las empresas e instituciones públicas, el empleo de un medio "no tan usual" como el teléfono, etc.

Los métodos utilizados en esta campaña sientan un precedente funesto para el desarrollo de la democracia en el país. Una cosa es decirle al ciudadano que debe tener cuidado para no incurrir en un *error* al hacer su "cálculo político" y otra muy distinta es "fabricar" un complejo de culpa anticipado, convirtiendo el ejercicio del voto en un evento marcado por rasgos "históricos", sufridos por un elector convencido de su propensión a la *malicia*. Este proceso electoral no solo ha dejado a cada uno "de cara a su elección", sino que, así como sucedió durante la represión o la guerra, cada elector ha quedado "marcado moralmente", frente a sí mismo y frente a sus vecinos, compañeros de trabajo, amigos o familiares. Y esto ha sido así, en parte, porque las elecciones estuvieron marcadas por un fuerte acento negativo, que colocó a buena parte del electorado ante un dilema moral, que de simple pasa a ser un falso dilema: *¿votaré por los buenos o por los malos?* Claro, el mensaje escondido tras esta pregunta es otra, más perjudicial para la democracia: *¿soy bueno o soy malo?*

Y no se trata de que la política no tenga nada que ver con la moral, sino que la moral no debería plantearse en esos términos. Existe una contradicción curiosa entre estas "estrategias" y la idea liberal de la propaganda, la cual no es un mero ejercicio *racional* (instrumental) del poder de elección, como es el caso de la publicidad, sino que implica una dimensión que solo puede surgir de la noción misma de ciudadanía y de la elección *razonable* (comunicacional) que se ejerce dentro de las redes del diálogo, de la deliberación y del consenso de los fines sociales y políticos, que garanticen una mejor convivencia. No se puede construir la democracia descalificando de antemano al interlocutor, ya que, de ese modo, no solo se deshace de él, sino que se entierra la base misma de la sociedad abierta y plural. El interlocutor, el otro, el contrincante, no solo es posible, sino que es *necesario*.

Las elecciones no deberían poner el tema de los derechos fundamentales bajo el signo del temor o la mentira, no solo porque es probable que los ciudadanos podrían resultar airados. Más importante es el hecho de que el fundamento mismo

de los derechos humanos, la libertad de los sujetos, resultará puesto entre paréntesis, con lo cual se corre el riesgo de minar los fundamentos de una sociedad donde se supone que las instituciones están al servicio de esos principios. Esto lleva a pensar en el papel que deberían asumir algunas de esas instituciones, en particular las encargadas de obtener, procesar y distribuir la información, los llamados medios de comunicación social.

5. El papel de los medios de comunicación social

La sociedad civil debería tener una palabra que decir frente al papel desempeñado por los medios de comunicación social, pues no se puede sugerir la identificación entre éstos y aquélla. Las elecciones del 2004 lo han hecho aún más evidente, dado el rechazo de buena parte de la campaña mediática por parte de la ciudadanía. Y es que, a la vez que se les adjudica su responsabilidad en las campañas políticas, se vuelve necesario replantearse el rol de los medios, en una sociedad moderna y democrática. El fundamento teórico del ejercicio comunicacional, basado en el derecho irrestricto a la libertad de la información, no puede escamotear los diversos deberes, adquiridos, precisamente, a partir del ejercicio de este derecho. Por eso, además de señalar con el dedo y exigir cambios "de conciencia", en quienes dictan las políticas de comunicación social, se debe pensar en cuál deberá ser el rol de las instituciones mediáticas.

Para ello resulta útil poner en crisis la dicotomía entre *público* y *privado*, sobre la cual, al parecer, se funda la naturaleza de los medios. Su importancia se comprueba reclamos usuales por los procedimientos de los periódicos y las estaciones de telecomunicación, por pasar por alto sus *responsabilidades públicas*. Estos reclamos son acusados de cierta "desventaja moral", dado que, al apelar a la responsabilidad pública de una *organización privada*, se daría una unión imposible entre intereses "colectivos" y "privados", con la consiguiente descalificación de esas exigencias, ya que éstas vendrían a violentar la necesaria independencia de las esferas que componen la sociedad moderna.

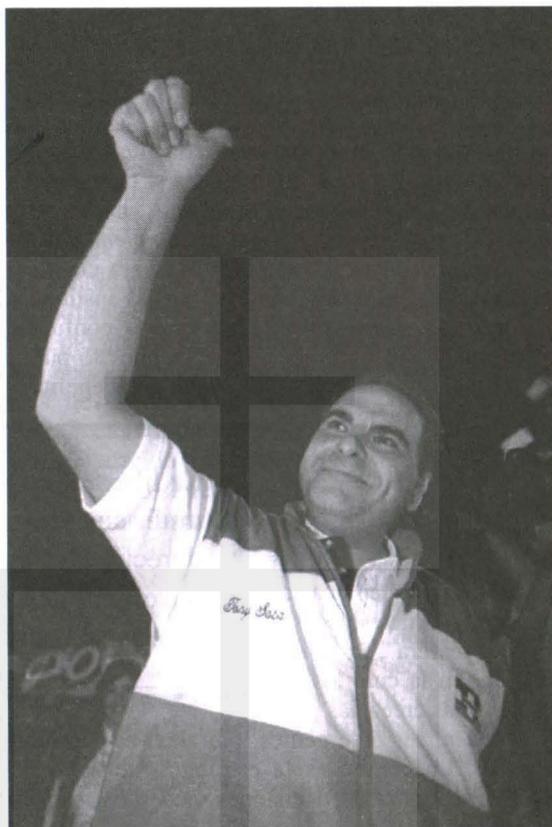
El ejemplo tradicional que ilustra esta dificultad de emparejar las responsabilidades públicas y la labor de los medios es la naturaleza de las *utilidades corporativas*. Éstas no se deben más que a la búsqueda de los beneficios propios, para el caso, el aumento del capital, sea este financiero, huma-

no, "social", etc. A los directivos de un periódico, de una radio o de un canal de televisión no les debería interesar más que la generación de beneficios de la corporación; además, esta misma lógica debería predominar en las decisiones y aspiraciones de todo aquel que trabaja para el medio. Cualquier otro beneficio caería dentro de las llamadas *utilidades sociales*, y, si bien podrían ser deseables, no serían en absoluto un imperativo.

Si se ve bien, de la distinción entre uno y otro tipo de utilidades, así como de su separación, en la práctica dependerá el buen desarrollo de las instituciones dentro de una sociedad liberal, apegada a la lógica de los derechos ciudadanos. Después de todo, una sociedad abierta será aquella en la cual existan suficientes *garantías* para el libre desarrollo de los estilos de vida más variados. Por supuesto, si se trata de obtener beneficios, la decisión sobre la urgencia o pertinencia de éstos no se puede confiar a otra instancia que no sea la misma libertad de los sujetos, sean éstos individuales o colectivos. Confiar tan grave tarea a una instancia diferente (dirigencia política, autoridad religiosa o elite intelectual) es sumamente riesgosa, ya que pondría en peligro la misma apertura y el pluralismo de dicha sociedad.

De lo anterior se sigue que, dado que los medios son organismos sociales, *construidos sobre la base de los intereses privados*, no tendría sentido hacer exigencias que sí serían pertinentes en instituciones de carácter "colectivo", a saber, instancias gubernamentales y estatales, organismos de asistencia social, asociaciones sin fines de lucro, etc. Es más, si bien se podría achacar a los medios cierta incongruencia, al hacer a un lado el hecho de que ellos mismos *ya son un colectivo*, es fácil ver la respuesta en la cual algunos apoyarían la defensa de su índole privada: lo que los convierte en un colectivo es la comunidad de intereses, los cuales *no son compartidos por todos* los miembros de la sociedad; por ello, la responsabilidad es para con tales intereses comunes y para con quienes los comparten.

Estas últimas precisiones son necesarias para explicar algunos fenómenos de asociación frecuentes en los medios y que incluso se han convertido en su factor constitutivo y no meramente en algo accidental. Es evidente que entre diversas instituciones mediáticas, así como dentro de ellas, se presentan diversas "afinidades electivas", en función de la coincidencia de intereses, las visiones del mundo, la identidad étnica o religiosa, etc. Y así como se



desarrollan estas afinidades dentro de cada institución, no en un sentido accesorio, sino fundamental para la cohesión y garantía del buen funcionamiento del colectivo, de tal manera que funcionan como elemento aglutinante entre los diversos medios, conformando alianzas estratégicas, *clusters* o "grupos empresariales". Eventualmente, estos lazos trascienden las fronteras de los países o regiones, con lo cual a las ventajas de índole financiera o técnica se unen la riqueza de formatos, estilos y contenidos, así como las peculiaridades de la diversidad cultural.

El carácter colectivo de una institución mediática no tiene por qué estar reñido con la índole privada de los beneficios que persigue. La coincidencia de intereses no los anula, más bien, los potencia; las asociaciones mediáticas vendrían a ser catalizadores de dichos intereses, así como la estrategia más idónea para enfrentar la competencia, tan necesaria en un medio profesional, que busca siempre "dar más y con la mejor calidad". En otras palabras, "colectivo" no solo señala al "grupo", sino que permite poner el énfasis en que se trata de *mi* o

nuestro grupo; con lo cual queda claro que el carácter "privado" de los intereses no tiene por qué ser, necesariamente, "individual", ni tiene por qué pasar por encima de tales intereses individuales.

Es aquí donde se vuelve pertinente distinguir entre "público" y "colectivo", pues si bien pueden ser usados como si fueran sinónimos, hacen referencia a aspectos *diferentes, pero complementarios* de la sociedad. Parte de la dificultad para justificar unas responsabilidades públicas, en las instituciones mediáticas está relacionada con la confusión entre uno y otro término. Se piensa que "lo público" se identificaría con la búsqueda de "beneficios colectivos", mientras que la expresión "colectivo" habla de las "utilidades sociales" o públicas. En realidad, limitar el significado de la primera expresión para señalar que en una sociedad moderna es necesaria una "esfera", la *esfera pública*, en la cual los intereses y las creencias pueden, *deben*, ser divergentes, plurales, es poco iluminador. Lo común es la estructura de deliberación, de la toma de decisiones, acuerdos, etc., lo cual sería el conjunto de *condiciones* que permiten la diversidad de intereses y creencias.

A la vez que se trata de defender una esfera pública, en la cual todos tengan cabida, es claro que, en tales procesos de deliberación, desempeñarán un papel fundamental aquellos *colectivos*, comunidades de creencias e intereses comunes, que no solo suponen puntos de vista "encontrados", sino que se construyen a partir de una cierta *convergencia*, más o menos consensuada. A la coincidencia de intereses se une la necesidad de un espacio que garantice el "encuentro" con los intereses de otros individuos y colectivos que, en esta ocasión, puede que no lleven aparejada la garantía ni la necesidad de convergencia.

Así como no puede identificarse sin más lo público y lo colectivo, tampoco puede reducirse el problema del rol social de los medios a la separación de lo "público" y lo "privado". Los colectivos no tienen por qué ser la tumba de la iniciativa privada, por lo menos no necesariamente. Pero se trata de algo más: *lo público supone individuos autónomos*. Esto es como decir que no se puede pensar la sociedad moderna ni la condición del ciu-

dadano contemporáneo sin incluir, en el análisis, ambas condiciones humanas. La salud de una esfera no será posible sin la salud de la otra. Solo una visión dialéctica de la sociedad, de las dimensiones pública y privada del hombre y de sus instituciones, podrá volver coherentes las aspiraciones legítimas de cualquier "liberalismo social" o "socialismo democrático". A la hora de pensar en los "intereses privados" que deben ser privilegiados, sean éstos individuales o colectivos, hay que tomar en cuenta que, al menospreciar los esfuerzos por construir los escenarios de discusión pública, se están minando también las garantías necesarias

para el ejercicio de tales proyectos. La conocida máxima de Voltaire, algo así como "no comparto tu punto de vista, pero defenderé con mi vida tu derecho a exponerlo", ilustra muy bien el compromiso con la construcción de los espacios, en los cuales se da la realización personal y social.

La libertad de los ciudadanos para difundir sus ideas y opiniones no les da derecho a transmitir ideas falsas o inverosímiles, tal como lo hizo la propaganda de ARENA.

Por otro lado, hay que cuidarse de no identificar sin más los intereses privados de una institución mediática con la obtención de ganancias económicas. No es que éstas no sean importantes, pero es que, por un lado, aquí la obtención de ganancias está sujeta a una serie de "mediaciones", tales como la obtención de una buena imagen ante el público, el respaldo de grupos de intereses similares o compartidos, el respeto por parte de la audiencia, etc., lo cual convierte el asunto de las ganancias en una apuesta y en un ejercicio de equilibrio, que dista mucho de ser simple. Por otra parte, aunque no en "segundo lugar", esas mediaciones son, en efecto, fines en sí mismas, dado que los medios no están conformados solo por personas que desean lucrarse, sino también por profesionales de la comunicación, periodistas que, no es extraño, estarían comprometidos con valores que van más allá de las ganancias económicas —la difusión de la verdad, la objetividad en la información, la participación ciudadana—.

Y es que, más que preguntarse si existen intereses privados dentro del ejercicio de la profesión mediática, la pregunta debería ser por las "exigencias sociales", en las cuales tales intereses se desarrollan. Sería un contrasentido suponer que los tra-

bajadores en los medios deban renunciar a sus aspiraciones de realización individual. Igual de ilusorio sería sostener que los medios deberían aislarse dentro de la sociedad, renunciando a establecer vínculos con aquellos grupos y asociaciones con los cuales comparten intereses. En efecto, este requisito sería contradictorio con la realidad misma de los individuos y de las instituciones dentro de la sociedad, ya que ni los unos ni las otras se han originado en el aislamiento. Y, aunque esto último fuese cuestionado, persiste la pregunta moral de si es correcto que el trabajador de los medios carezca de motivaciones personales o de compromisos con grupos de intereses. Cabe preguntarse también si los comunicadores debiesen eludir la búsqueda de sus beneficios particulares o la alianza con aquellos con quienes comparten creencias o programas.

No es multiplicando los “deberes” de los comunicadores, o las prohibiciones, como se avanza en el rol social de los medios. Si, tal como se señaló arriba, la esfera pública no excluye las reivindicaciones particulares de individuos y grupos, el ejercicio del periodismo y de la comunicación social no requieren de un proceso de purga interna, que limpie de “malas compañías” a la organización. No se trata de que los comunicadores se aislen o renuncien a sus filiaciones grupales o comunitarias. Ni siquiera es preciso renunciar a las filiaciones partidarias, como si la pertenencia a un partido fuera equivalente a formar parte de un grupo delincuencial o terrorista. En un Estado de derecho, las instituciones amparadas en éste no deberían estigmatizar a nadie por sus preferencias y filiaciones, mucho menos a los profesionales de la comunicación.

Lo que sí se espera de éstos es que, en tanto profesionales con unas determinadas responsabilidades para con la sociedad, sepan realizar su trabajo, siendo fieles a los valores que dicen fomentar y cumpliendo con las normativas que se han comprometido a respetar. La fidelidad fundamenta el cumplimiento de la norma, en tanto los valores surgen de la racionalización de los fines legítimamente pretendidos, mientras que las reglas no son más que límites impuestos en función de la realización de esos fines. Pero el que los valores sean la base no quiere decir que fomentarlos sea una tarea sencilla. En efecto, puede que las normas sean duras, a veces, pero por lo general son claras y conocidas por los interesados. No así los valores, que casi siempre se formulan de modo bastante general y, por lo mismo, están sujetos a diversas interpretaciones.

Un caso concreto que vale la pena analizar es la “autocensura” del candidato Schafik Handal y el papel de los periodistas de la *Telecorporación Salvadoreña*. Supuestamente, el hostigamiento sistemático al que había sido sometido, lo llevó a acusar a los periodistas de esa cadena televisiva de intentar dañar su campaña y su imagen pública. Al mismo tiempo, les informó, en público, que no les concedería más entrevistas. Dejando de lado el proceder del candidato, aquí interesa señalar el papel de los periodistas de esa cadena. El hostigamiento refleja el deplorable papel de unos funcionarios mediáticos que no solo deben evitar esa práctica, sino que, además, llevan a cabo una labor considerada como una contribución para que desaparezcan de la sociedad la manipulación y la tergiversación, propias de países donde no se respeta el Estado de derecho. Son prácticas que contribuyen a minar las bases de la democracia y la participación ciudadana. Por otra parte, la reacción de buena parte de la prensa y de los medios reflejó un curioso análisis, más preocupante aún. Parecían aceptar la “autoexclusión” del candidato, a la vez que atribuían el hecho a su carácter “antidemocrático” e “intolerante”. Características atribuidas también a su partido. Es grave que las comunicadores sociales sean distanciados de repente de su labor de comunicadores, al “aceptar” que el candidato de la segunda fuerza política del país se retirara de sus foros. Con ello renunciaron a cumplir con su papel de mediadores en el foro público. Es preocupante, también, que la descalificación del candidato, por parte de los comunicadores, fuera muy parecida a la utilizada por ARENA. La identificación de adjetivos podría reflejar la identificación de fines, con lo cual se daría una mezcla inmoral de unos intereses colectivos con las responsabilidades públicas.

A esto hay que agregar la cobertura de los acontecimientos y los programas relacionados con la actividad de los partidos. Los medios fueron parte activa de una “campaña anticipada”, la cual luego fue sancionada por el Tribunal Supremo Electoral, con lo cual pasaron por encima de las convenciones morales y de la legalidad del proceso. ARENA y el FMLN fueron sometidos a escrutinio público por sus excesos propagandísticos (¡y por los mismos medios!), pero éstos no han sido cuestionados públicamente por el “acompañamiento” que hicieron de tan buena gana.

El medio, por otro lado, es responsable de los contenidos transmitidos en sus “espacios”. Es bien

conocida la "aclaración" utilizada por estas empresas: "Los conceptos vertidos en el siguiente comercial son de la absoluta responsabilidad de la entidad que los presenta". Esta es una licencia concedida al medio para ceder espacios sin responsabilizarse de los contenidos. Esta práctica contradice los principios fundamentales del derecho a la libertad de información y de los deberes de los ciudadanos y los seres humanos. Es una prerrogativa que difícilmente podría universalizarse, dada la defensa de los derechos mencionados y sus garantías sociales. Es evidente, por ejemplo, que los derechos adquiridos al pagar por un bien o servicio no son ilimitados, sobre todo si de alguna forma está comprometida la esfera pública. El pago de un equipo estereofónico no elimina los deberes para con la comunidad, tales como no interferir con música el sueño del vecino. Con mayor razón los mensajes transmitidos por la televisión o la radio. La libertad de los

ciudadanos para difundir sus ideas y opiniones no les da derecho a transmitir ideas falsas o inverosímiles, tal como lo hizo la propaganda de ARENA. Tampoco es legítimo utilizar imágenes chocantes y sangrientas, como en las de la propaganda del FMLN, sobre los escuadrones de la muerte, ni las alusiones a los "muertos de la guerra, en los anuncios del "ciudadano Rafael Menjívar", quien se amparó en el derecho a la libre expresión.

Hay que tomar en cuenta que estos mensajes eran transmitidos a toda hora, incluso dentro de las franjas destinadas al público infantil. La frecuencia de los anuncios podría generar, además, otra discusión acerca del peligro de un efecto de saturación, que muchos lo consideran parte de una estrategia de manipulación. A esto hay que añadir el uso de niños en la propaganda de ambos partidos, una práctica ilegal según el Tribunal Supremo Electoral. Esto remite a las viejas discusiones sobre el uso de la publicidad subliminal, para incidir en las intenciones del espectador. De lo que se trata, en suma, es de si los que se encargan de la comunicación social tienen clara su tarea, en vista del poder que tienen a su alcance. Es obvio que las estrategias de manipulación no pueden ser justifi-

cables en una sociedad que se precie de democrática y, así como no vale el argumento de que dado que la manipulación es efectiva es válida, tampoco ayuda achacar las culpas a quienes elaboran los anuncios o a quienes pagan por ellos. A nadie parece ofenderle demasiado que los medios se autocensuren, si se trata de mensajes eróticos o violentos. ¿Por qué habrían de ofenderse si se les exige que evalúen y enjuicien la publicidad de las campañas desde los estándares éticos, conocidos y respetados por la sociedad?

Las elecciones de 2004 contribuyeron muy poco a la transición democrática y al cambio social. En la campaña electoral predominó una concepción mercantilista de la política, y gran parte de la propaganda política se manejó según las técnicas de la publicidad comercial. El poder sistémico tuvo todas las ventajas.

La defensa de la esfera pública y su conveniencia para el buen desarrollo de la sociedad van más allá de la implementación de leyes y restricciones. Más que exigir el mero respeto de las reglas, se trata de velar por el fomento de unos valores esenciales para la convivencia ciudadana. Y es claro que no siempre es la mejor estrategia aferrarse a un "valor", el cual hay que respetar a toda costa, pues es posible que la "conservación" a ultranza conlleve, en tanto estrategia, los mecanismos que imposibiliten fomentarlo, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Es paradójico, por ejemplo, que la insistencia en unos valores ligados al individualismo liberal —la libertad, la participación ciudadana, etc.—, esté ligada a ciertas prácticas que, lejos de fomentarlos, los desautoriza. Pensemos, por ejemplo, en el énfasis en el respeto al "valor de la vida humana", mientras se apoya de manera explícita una serie de medidas punitivas y atentatorias de los derechos fundamentales, las cuales están lejos de fomentar ese valor —"tratos especiales" para las "maras" o el "plan mano superdura"—.

Tema distinto, aunque relacionado con el anterior, es la incongruencia entre el discurso sobre dichos valores y los hechos. Muestra de esto podría ser la violación a la privacidad telefónica. Deben evaluarse la legitimidad y la efectividad a largo plazo de las "llamadas de los candidatos" a teléfonos supuestamente privados, ya que está en juego el discurso de los consabidos argumentos de que todo ciudadano "debería tener acceso" a la di-

fusión de los valores e ideales que subyacen a una sociedad libre. El mecanismo utilizado deja ver que algunos de esos valores —el derecho a la intimidad— habrían sido hechos a un lado. Y no solo los partidos tienen responsabilidad en estos casos, sino también los medios, para el caso, las compañías telefónicas.

Pero la tarea no termina con el mero fomentar valores y prácticas éticas. Esto podría hacer pensar que el asunto a resolver es nada más el cómo deberán “entrar” los comunicadores en la “esfera pública”, como si de adscribirse a un club u organización se tratase. Más bien, se trata de la *democratización de la esfera pública* dentro de las instituciones mismas, en este caso, las instituciones mediáticas. Lejos de reducir el problema del rol de los medios a “las personas y sus personalidades” (los propietarios, los empleados, etc.), hay que enfatizar los mecanismos e instituciones existentes. No solo hay marcos legales, sino también normas institucionales, manuales de estilo y códigos de ética. A esto hay que agregar la participación necesaria de la “sociedad civil”, sobre todo la de los grupos y ciudadanos a quienes compete el quehacer de los medios.

La esfera pública, en sus instituciones, debe democratizarse. Y esto puede lograrse admitiendo la “entrada” de lo público en las instituciones mediáticas, en primer lugar, por el reconocimiento de lo que ya existe en las instituciones mismas: procedimientos, medidas disciplinarias, mecanismos de toma de decisiones, etc. Además, los medios deben considerar que, por lo menos a largo plazo, sería conveniente apostar a la transparencia y el diálogo con un público que está lejos de ser pasivo y fácilmente manipulable. Por ello, deberá emprenderse la lucha por la inclusión de mecanismos democráticos para tomar decisiones.

Fomentar las responsabilidades no es tarea fácil, pero no hay otra manera de abordar “creativamente” el problema del rol de las instituciones mediáticas, en el desarrollo de los procesos electorales. Hay que tomar en cuenta que los medios son una pieza necesaria en una sociedad democrática. Así que el problema no puede eludirse como si se tratara de construir la sociedad a sus espaldas. Pero tampoco se puede olvidar que, ligado al problema de las responsabilidades de los medios, está el del derecho inalienable a la libre información. Y justo de eso se trata: de reconocer que la exigencia que se hace a los medios no contradice ese derecho, sino que le da cuerpo, lo concretiza y lo ubica en el

único marco posible de realización, que no es otro que el de la comunidad ciudadana.

6. A modo de conclusión

Las elecciones de 2004 contribuyeron muy poco a la transición democrática y al cambio social. En la campaña electoral predominó una concepción mercantilista de la política, y gran parte de la propaganda política se manejó según las técnicas de la publicidad comercial. El poder sistémico tuvo todas las ventajas.

La imagen de los candidatos centró la campaña, dejando en un segundo plano el contenido de los programas. Otra parte considerable de la propaganda fue enfocada al ataque alevoso contra el rival, sin respetar límite ético alguno. La campaña fue informativamente pobre y pedagógicamente nula. Primaron el populismo y la demagogia del lado opositor, mientras que el partido oficial privilegió una campaña ideológica.

Las elecciones revelaron la realidad del poder en el país: la clase dominante es, a la vez, clase dirigente. ARENA es, simultáneamente, partido, movimiento social y maquinaria ideológica al servicio de la clase en el poder. La naturaleza de dicho poder y el modelo neoliberal que impulsa condicionan lógicamente la situación de polarización del sistema de partidos. El autodenominado centro político, formado por la Coalición CDU-PDC, estaba por ello mismo condenado a desenmascarse como parte de la derecha, ante la presunta necesidad de una alternancia viable, o como parte de la oposición meramente formal, que puede restarle votos a la oposición real y con ello volver innecesario el cambio de modelo económico.

La izquierda representada por el FMLN volvió a demostrar que no sabe ganar elecciones presidenciales. Fue incapaz de imponer su propia agenda en el debate político e incluso fue incapaz de imponer el debate. De forma que la derecha de ARENA pudo hábilmente eludir el debate directo e imponer su agenda de temas, desde la aplastante superioridad que le dio la sobresaturación mediática. Colocada a la defensiva, la izquierda del FMLN reaccionó tarde y mal a la campaña sucia, con su propia campaña sucia, cayendo también en la trampa de su adversario. Desvinculada su campaña del programa de revolución democrática, que debería inspirar estratégicamente sus acciones durante la transición, no supo retomar la iniciativa y terminó con

una campaña floja en contenidos, en propuestas y en visión estratégica.

El proceso electoral ha demostrado, asimismo, que la derecha no está dispuesta a perder. Su reacción fue echar mano de todas las maniobras posibles, incluidas las ilegítimas e ilegales. El uso de propaganda paralela fue el hecho más sobresaliente. El papel de ciertos medios de comunicación social, cuyos propietarios promovieron una parcialidad escandalosa y denotaron falta de profesionalismo y de ética periodística, fue también muy revelador. Las amenazas a los trabajadores y empleados, por parte de varios empresarios, quienes atemorizaron a su personal con la pérdida del empleo, fue muy destacada. Asimismo, el tema de las remesas y la permanencia de los emigrantes en Estados Unidos, supestando en peligro, si ganaba el FMLN, campaña a la que se sumaron algunos funcionarios del gobierno de Washington y del Congreso estadounidense.

La postura del FMLN de achacar exclusivamente a "factores externos", es decir, a la campaña de ARENA, la derrota, significa rehuir la responsabilidad por el fracaso y eludir el necesario análisis y autocrítica de los errores cometidos. Tampoco revela madurez democrática pretender que no hubo derrota, al valorar exclusiva y unilateralmente el aumento de la propia votación. Se gana con la mitad más uno de los votos válidos emitidos, por tanto, lo decisivo es el porcentaje obtenido. Otra lectura de los resultados es caer en un triunfalismo sin sentido. La izquierda, hoy más que nunca, necesita un baño de realismo y comenzar en serio un

proceso de renovación de su dirigencia, de su estructura partidaria y de su estrategia política. No se trata de echar por la borda todo lo alcanzado o de no valorar los avances logrados, a pesar del fracaso. Mucho menos de caer en el pragmatismo y confundirlo con el necesario realismo político.

El triunfo de ARENA puede volverse una victoria cuestionable, si el marco de crisis nacional latente, en que se da, y las tendencias negativas de un modelo neoliberal que ha venido mostrando señales de agotamiento, en la actual situación histórica que vive el país, no son convenientemente valorados. Es tiempo de corregir los graves costos sociales, los desequilibrios económicos y la marginación de amplios sectores sociales. Sobre todo, debe corregirse el estilo autoritario de conducción y el exagerado presidencialismo, defectos que se han dado de manera más acusada en el último gobierno de ARENA. Urge que el partido de gobierno asuma el método del diálogo y de la concertación. El costo de ceder algunas veces siempre será menor que el de pretender no ceder nunca y cerrarse a cualquier crítica o iniciativa opositora. Lo más decisivo es que haya un cambio en las prioridades del gobierno, que demuestre que la primera de todas es la sensibilidad social. Si el sistema no logra hacerse de "un rostro humano", que resulte convincente y que muestre resultados concretos, puede venir una agudización de la crisis, en todos los niveles, de insospechadas consecuencias. Es el verdadero peligro de la ingobernabilidad que acecha, aquella con raíces en la sociedad, más que una incubada en la vida parlamentaria.